



**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

## **TRABAJO FIN DE GRADO**

### **GRADO EN DERECHO**

**Departamento de Derecho Público General**

**Área de Derecho Penal**

**Curso 2016/2017**

# **El sentido actual de la resocialización y su incidencia en la práctica legislativa y jurisprudencial**

**Delia Amores Velasco**

**Tutor: Cristina Méndez Rodríguez**

**Salamanca, julio de 2017**

# **TRABAJO FIN DE GRADO**

## **GRADO EN DERECHO**

**Departamento de Derecho Público General**

**Área de Derecho Penal**

**Curso 2016/2017**

**El sentido actual de la resocialización y  
su incidencia en la práctica legislativa y  
jurisprudencial**

**The current meaning of resocialization  
and its impact on legislative and  
jurisprudential practice**

**Nombre del/la estudiante: Delia Amores Velasco**

**e-mail del/a estudiante: u156696@usal.es**

**Tutor/a: Cristina Méndez Rodríguez**

## **RESUMEN:**

El artículo 25.2 de la Constitución Española establece que el cumplimiento y la ejecución de la pena privativa de libertad se deben dirigir a la reeducación y reinserción social del penado. Es importante aclarar la naturaleza y el contenido que actualmente tiene este el ideal resocializador, el cual, ha sido y sigue siendo objeto de una intensa discusión doctrinal y jurisprudencial. Una vez hecho este razonamiento teórico, el trabajo se propone analizar la posible inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable introducida en nuestro Derecho Penal a través de la reforma del Código Penal en el año 2015. Haremos referencia a las sucesivas las interpretaciones sobre esta cuestión llevadas a cabo por nuestro Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, se pone de relieve la multitud de supuestos judiciales en los que se ha utilizado el aludido precepto constitucional para impugnar la denegación de instituciones penitenciarias orientadas a favorecer la resocialización.

**PALABRAS CLAVE:** resocialización, reinserción, reeducación, prisión permanente revisable, pena, sistema penitenciario.

## **ABSTRACT**

Article 25.2 of the Spanish Constitution establishes that compliance with and execution of the custodial sentence should be directed to the re-education and social reintegration of the prisoner. It is important to clarify the nature and content that currently has this ideal re-socializer, which has been and continues to be the subject of intense doctrinal and jurisprudential discussion. Once this reasoning is more theoretical, the work aims to analyze the possible unconstitutionality of the reviewable permanent prison introduced in our Criminal Law through the reform of the Penal Code in 2015. We will refer to the successive interpretations on this issue carried out by our Constitutional Court and by the European Court of Human Rights. Finally, highlights the multitude of judicial cases in which the aforementioned constitutional precept has been used to challenge the denial of penitentiary institutions aimed at favoring re-socialization.

**KEYWORDS:** resocialization, reinsertion, rehabilitation, reviewable permanent prison, punishment, prison system.

## ÍNDICE

<b>ÍNDICE DE ABREVIATURAS .....</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>1.CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN DENTRO DEL ARTÍCULO 25.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Consideraciones generales. ....	3
1.2. Análisis de las principales cuestiones que plantea el artículo 25.2 CE. ....	8
1.3. La naturaleza jurídica de la reinserción social. ....	10
1.3.1. La finalidad de la pena privativa de libertad. ....	10
1.3.2. ¿Constituye la reinserción social un derecho fundamental o es un mero mandato dirigido al legislador para orientar la política penitenciaria y penal? ..	12
<b>2. CAPÍTULO II. LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE PONE EN DUDA EL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN .....</b>	<b>15</b>
2.1. Breve referencia a los antecedentes históricos de la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico. ....	15
2.2. Contexto social y político en el que se aprobó la reforma del Código Penal. ....	17
2.3. Características y régimen legal de la “prisión permanente revisable” dentro del Código Penal. ....	19
2.4. La incompatibilidad de la prisión permanente revisable con nuestra Constitución Española. ....	23
2.4.1. El principio de reeducación y reinserción social: artículo 25.2 CE. ....	23
2.4.2. El principio de legalidad: artículo 25.1 CE .....	26
2.4.3. El principio de humanidad de las penas y de proporcionalidad. ....	27
2.5. Derecho comparado. ....	30
2.6. La jurisprudencia del TEDH y TC. ....	32
<b>3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS: INVOCACIÓN DEL ARTÍCULO 25.2 CE PARA IMPUGNAR LA DENEGACIÓN DE DETERMINADAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN .....</b>	<b>35</b>
<b>4. CONCLUSIONES FINALES .....</b>	<b>40</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>43</b>

## **ÍNDICE DE ABREVIATURAS**

<b>Art</b>	Artículo
<b>C</b>	Contra
<b>CE</b>	Constitución Española
<b>CEDH</b>	Convención Europea de Derechos Humanos
<b>CGPJ</b>	Consejo General del Poder Judicial
<b>CP</b>	Código Penal
<b>LECrim</b>	Ley de Enjuiciamiento Criminal
<b>LO 1/2015</b>	Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
<b>LOGP</b>	Ley Orgánica General Penitenciaria
<b>LOTC</b>	Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
<b>STC</b>	Sentencia del Tribunal Constitucional español
<b>STEDH</b>	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
<b>TC</b>	Tribunal Constitucional
<b>TEDH</b>	Tribunal Europeo de Derechos Humanos

## INTRODUCCIÓN

*Esos caballeros que, cuando se les comenta la miseria que nuestros presos padecen, se contentan con decir “bastante agraciados son con subsistir...” se olvidan de las vicisitudes de los asuntos humanos; los cambios inesperados de la fortuna los que los hombres están sujetos; y que cuando las circunstancias adversas confluyen, pueden en muy poco tiempo ser reducidos a la indigencia, y convertirse bien en deudores o en presos.*

JOHN HOWARD (1777), *The state of the prisons in England and Wales*.

Dentro del Capítulo II del Título Primero “De los derechos y deberes fundamentales” de la Constitución Española, se encuentra el artículo 25.2 que hace referencia a una de las finalidades de la pena privativa de libertad cuando afirma que *“las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”*.

Desde la incorporación de esta idea resocializadora de la prisión en los siglos XIX y XX, coincidente con la evolución de la teoría de las penas, las discusiones y debates interpretativos suscitados entre la doctrina penalista han sido constantes. La pena privativa de libertad, principal respuesta punitiva en nuestro país, es un instrumento coactivo en manos del Estado que permite la restricción de un derecho tan importante como es la libertad. Las cárceles, además de utilizarse como castigo ante la comisión de delitos, ¿buscan la reeducación y reinserción del condenado o únicamente persiguen fines puramente retributivos? En poco tiempo, el modelo de la resocialización ha pasado de instaurarse en nuestro ordenamiento jurídico como la solución de futuro al antiguo Derecho Penal a ingresar en una crisis bastante complicada. Es más, debido a las sucesivas reformas legislativas y sobre todo con la última modificación del Código Penal en marzo de 2015, vuelve a extenderse la imagen del declive de la resocialización. Entonces, ¿hoy en día podemos hablar de la resocialización o sería un anacronismo? Todas estas interrogantes abiertas me han llevado a escoger el tema de los fines resocializadores para mi Trabajo de Fin de Grado.

El principal propósito de este trabajo es esclarecer qué sentido o qué valor tiene actualmente el principio resocializador, cuál es su contenido y su naturaleza y por otro lado, elaborar un examen crítico de algunas de las medidas legislativas que recientemente se han aprobado en nuestro país y de decisiones judiciales que podrían considerarse contrarias al mandato constitucional del artículo 25.2 de la CE.

Para abordar estas cuestiones, he consultado varias fuentes bibliográficas tales como libros doctrinales, revistas de ciencia penal y criminológica, jurisprudencia de diferentes tribunales especialmente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e informes institucionales o gubernamentales.

El trabajo se distribuye en tres capítulos y cada uno de ellos está destinado a abordar distintas cuestiones. El primer capítulo es una argumentación teórica del principio de resocialización plasmado en nuestra Constitución que trata de explicar su significado, así como las diversas interpretaciones por el Tribunal Constitucional. El capítulo segundo se centra en cuestionar el encaje constitucional de una de las novedades introducidas en nuestro sistema penal por la reforma del Código Penal en 2015: la prisión permanente revisable. Finalmente, debido a la mayor atención que se da hoy en día a los sustitutivos penales, el tercer capítulo se basa en explicar cómo en muchos litigios penales se ha utilizado el artículo 25.2 CE para impugnar la denegación de la concesión de estos beneficios penitenciarios por parte de los órganos jurisdiccionales.

## **1. CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN DENTRO DEL ARTÍCULO 25.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.**

### **1.1. Consideraciones generales.**

La pena de prisión, como respuesta del *ius puniendi*, es el resultado de un contexto político, económico y social de un determinado momento histórico. En base a ello, se han ido desarrollando diferentes teorías acerca de la finalidad de la pena.

*Grosso modo*, cabe decir que tradicionalmente han coexistido dos concepciones contrastadas. Una primera corriente está formada por las teorías absolutas, las cuales, conciben la prisión como una forma de retribución o de expiación por el delito cometido, fundamentándose en la remota Ley del Talió. En base a esta teoría, la pena es el castigo a través del cual se pretenden alcanzar fundamentalmente dos propósitos: que el delincuente pague por el mal acaecido y que el escarmiento sirva para compensar a la víctima del delito.

La otra concepción fundada en las teorías relativas piensa que la finalidad punitiva radica en la disuasión del infractor para que no vuelva a cometer delitos en el futuro, esto es: la prevención general dirigida a la comunidad con fines intimidatorios y la prevención especial del delito orientada hacia el delincuente en aras de su readaptación o reinserción en la sociedad originaria<sup>1</sup>.

De esta manera, la orientación abstracta y objetiva del término “resocialización” utilizada por la doctrina ha concedido y sigue concediendo en la actualidad, numerosas interpretaciones<sup>2</sup>.

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de resocialización del delincuente que forma parte del proyecto de la prevención especial, aparece consagrado en nuestro ordenamiento jurídico español en la actualidad en el artículo 25.2 de la Constitución Española<sup>3</sup>. A título ilustrativo, MAPELLI CAFFARENA divide el contenido de este apartado en tres secciones: un primer inciso referente a la reeducación y a la reinserción vista como una meta de la pena privativa de libertad; a continuación, un segundo apartado que fija un marco legal mínimo del condenado y finalmente, en una tercera parte del precepto se determinan los límites de actuación de la Administración penitenciaria<sup>4</sup>.

Este trabajo se centra especialmente en la primera parte: en el sentido y el contenido de los términos “reeducación” y “reinserción” en nuestro ordenamiento jurídico.

---

<sup>1</sup> DELGADO DEL RINCÓN, L.E.; El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la reeducación y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad. Publicado en *Revista Jurídica de Castilla y León*, número extraordinario, 2004, págs. 341-342.

<sup>2</sup> AYUSO VIVANCOS, M.; *Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España*, Serie Educación Social, 15, Nau Llibres, Valencia, 2003, pág. 13.

<sup>3</sup> Artículo 25 CE: *Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.*

<sup>4</sup> MAPELLI CAFFARENA, B.; Los fines de la ejecución de la pena privativa de libertad. AA. VV., *I Jornadas Penitenciarias Andaluzas, Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía*, Sevilla, 1983, págs. 13 y ss.



En lo que respecta a la reseña explícita del sentido de la pena dentro del artículo 25.2 CE, la doctrina señala como antecedentes de dicho precepto el artículo 297 de la Constitución de 1812 que dispone: “*Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar, y no para molestar a los presos; así, el alcaide tendrá a éstos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin comunicación; pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos*” y el artículo 8 de la Constitución de 1873 que reconoce el derecho “*en el caso de caer en culpa o delito, a la corrección y a la purificación por medio de la pena*”<sup>5</sup>.

Con la aprobación de la Constitución Española en 1978, la idea resocializadora se plasma hasta en la actualidad en el artículo 25.2. La intención del legislador era sustituir las ideas correccionales que habían prevalecido durante todo el siglo XIX por un nuevo modelo denominado “resocializador”. Sin embargo, como señalan autores como MUÑOZ CONDE o GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, esto se llevó a cabo en un momento inoportuno, ya que la aspiración de la reinserción como finalidad de la pena privativa de libertad estaba en plena decadencia y siendo objeto de duras críticas en los países europeos de nuestro entorno<sup>6</sup>.

En lo que respecta al modelo resocializador, cabe señalar que está basado en el estudio de, por un lado, las razones que llevan a una persona a cometer un delito (factores sociales como por ejemplo la exclusión, marginalidad, motivos económicos) y por otro lado, de los métodos o programas de tratamiento más apropiados para impedir que se vuelva ejecutar. Así, uno de los rasgos que lo caracteriza es el intervencionismo del Estado por ser considerado responsable de la vigilancia, condena, reeducación y reinserción del delincuente en la sociedad.

---

<sup>5</sup> PEITEADO MARISCAL, P.; *La ejecución jurisdiccional de condenas privativas de libertad*, Universidad Complutense de Madrid, EDERSA, Madrid, 2000, págs. 142 y ss.

<sup>6</sup> STRATENWERTH, G.; *Strafrecht und Sozialtherapie. Festschrift für P. Bockelmann*, 1979, pág. 919. ORTMANN, R., *Zur Evaluation der Sozialtherapie. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, Nº 106, 1994, pág. 782 y ss. Citado por JOSEP-MARÍA TAMARIT SUMALLA, J.; *Curso de Derecho Penitenciario*, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 31. DE MOLINA, ANTONIO GARCÍA-PABLOS.; *La supuesta función resocializadora del Derecho Penal: utopía, mito y eufemismo. Anuario de derecho penal y ciencias penales* 32.3, 645-700, 1979, págs. 646 y ss; MUÑOZ CONDE, F. *La resocialización del delincuente. Análisis y crítica de un mito. Sistema. Revista de Ciencias Sociales*, 31, 73-84, 1979, págs. 91-92.

Estas ideas predominaron en EEUU y Reino Unido en los años en los que reinaba el Estado de bienestar, caracterizado por un periodo económico bastante favorecedor y el aumento generalizado del nivel de vida. Durante este periodo, era posible o practicable llevar a cabo la reinserción del preso. Sin embargo, la pervivencia de este lapso de tiempo duró hasta la década de los 70, año en el que se produce un gran retroceso económico que hizo que seguidamente disminuyeran las ayudas públicas en muchos servicios sociales, entre las cuales estaban las administraciones penitenciarias.

Además de esta razón socioeconómica, existen otros factores que han influido en la crisis del ideal resocializador. En primer lugar, hay que señalar la desocialización y el efecto aislante que lleva aparejada la prisión para el condenado. Esto quiere decir que el delincuente, una vez que ingresa en prisión, inevitablemente tiene que abandonar su entorno familiar, laboral y debe adaptarse a un medio diferente: el entorno carcelario, además debe asumir nuevos valores de esta subcultura reducida, que produce una deformación de la personalidad del penado<sup>7</sup>. Dicha consecuencia ya fue denominada por CLEMMER en 1940 “prisionización”<sup>8</sup>, la cual, puede generar efectos negativos para el objetivo resocializador.

Del mismo modo, el hecho de que el delincuente deba aceptar, no de forma voluntaria, un determinado tratamiento penitenciario podría llegar a vulnerar ciertos principios constitucionales. Todo ello provoca consecuentemente la ruptura de vínculos con el exterior, respecto de su entorno familiar y de la comunidad en general. Al respecto, autores como MUÑOZ CONDE han dicho que la resocialización en el fondo es más una aspiración o un *desideratum* que una realidad<sup>9</sup> debido al enfoque trágico que muestran los centros penitenciarios y la contradicción que supone este ideal y la pena privativa de libertad que por su propia naturaleza lleva aparejada efectos desocializadores y estigmatizantes<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> AYUSO VIVANCOS, A.; *Visión crítica de la reeducación penitenciaria...*, Op. Cit., pág.17.

<sup>8</sup> CLEMMER, *The prison community*, 2ª Ed., Nueva York, Rinehart & Winston, 1958. Citado por SALAS, A. E. G. “Consecuencias de la prisionización”, *Revista Cenipec*, 20, 9-22, 2001, pág. 14.

<sup>9</sup> MUÑOZ CONDE, *La resocialización del delincuente...*, Op. Cit., pág. 387 y ss.

<sup>10</sup> QUINTERO OLIVARES, G., & MORALES PRATS, F.; *Comentarios Al Código Penal Español*, 6ª Ed., Aranzadi Thomson Reuters, 2011, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 102.

Igualmente, otro problema planteado es que del concepto “resocialización” han surgido diversas interpretaciones, a veces contrapuestas respecto a su objeto, contenido y los medios que debe utilizar el legislador para conseguir su efectividad en la práctica. Concretamente en nuestro ordenamiento jurídico desde que se introdujo este término hasta en la actualidad, los avances han sido escasos porque no se ha determinado de forma contundente qué se quiere conseguir con la resocialización<sup>11</sup>.

Por todas estas razones comentadas, se puede afirmar que en los últimos años el protagonismo del “modelo resocializador”, está siendo reemplazado por otro modelo completamente distinto denominado “modelo del control”. Esto significa que el Estado ha pasado de buscar la reinserción del condenado, concebida como ineficaz e innecesaria, a querer aumentar el número de controles rigurosos por considerar al colectivo de presos como un grupo de sujetos peligrosos que han infringido la norma penal deliberadamente, a su libre elección<sup>12</sup>.

En efecto, el “modelo de control” se caracteriza por la utilización de las penas privativas de libertad para conseguir otros propósitos tales como la intimidación de la sociedad, la retribución del delito y la neutralización del delincuente<sup>13</sup>. En otras palabras, el legislador ha comenzado a preocuparse por la búsqueda de otros fines de la pena: la prevención general negativa y la prevención especial negativa.

Tanto es así que el TC se ha pronunciado sobre esta cuestión (STC 48/1996, de 25 de marzo) mostrándose a favor del fin retributivo de la pena privativa de libertad. Este planteamiento es incompatible de forma manifiesta con el fin resocializador porque: ¿es posible proteger a la sociedad a través de la pena y a la vez reinsertar al delincuente que ha sido apartado de la misma para defenderla? Parece que no.

En definitiva, como afirma MENDOZA BUERGO, la sociedad actual pretende esquivar la impresión generalizada de miedo e inseguridad a través de la aplicación cada

---

<sup>11</sup> PEITEADO MARISCAL, P.; *La ejecución jurisdiccional de condenas privativas de libertad*, Op. Cit., págs. 146-147.

<sup>12</sup> PORTILLA CONTERAS, G.; *El derecho penal entre el cosmopolitismo universalista y relativismo posmodernista*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 33 y ss. Citado por DAUNIS RODRÍGUEZ. A, *Ejecución de penas en España. La reinserción social en retirada*, Comares, Granada, pág. 7.

<sup>13</sup> GARLAND, D.; *La cultura del control. Crimen y orden social en la cultura contemporánea*. 1ª Ed., Gedisa, Barcelona, 2005, pág. 102 y ss.

vez más rigurosa del Derecho Penal (lo cual, podría cuestionar el principio de ultima ratio) y haciendo prevalecer la política criminal represiva<sup>14</sup>.

## **1.2. Análisis de las principales cuestiones que plantea el artículo 25.2 CE.**

En este apartado nos centramos específicamente en el inciso primero del artículo 25.2 CE: *“las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”*.

Para empezar, conviene realizar la siguiente pregunta: ¿qué entendemos por “pena”? A lo largo de la historia, se han efectuado sucesivos intentos tendentes a lograr un concepto general o universal de “pena” y se han creado diferentes Teorías de la pena describiendo los fines de la misma. En efecto, debemos diferenciar el concepto de “pena” de su finalidad o función en la sociedad. Toda conceptualización hecha es el resultado de un determinado momento histórico, económico, político y social. Sin detenerme en las teorías que han ido surgiendo por las diferentes doctrinas con el paso el tiempo, me remito a la definición dada por RIVACOBÁ que muestra la realidad del sistema penal, definiendo la pena como *“la especie de sanción de carácter público de mayor gravedad existente en el respectivo ordenamiento”*<sup>15</sup>. La pena, entendida como una sanción, se impone de manera coactiva por un tribunal jurisdiccional y entre las existentes no cabe duda de que la más gravosa para el ser humano es la pena privativa de libertad. Ésta actualmente efectúa la siguiente función: proteger a la comunidad y aseverar el poder del Estado<sup>16</sup>.

A continuación, debemos explicar el significado de los términos “reeducación” y “reinserción”.

Previamente nos interesa analizar el término “resocialización” definida por MAPELLI CAFFARENA como *“principio fundamental de humanización de la*

---

<sup>14</sup> MENDOZA BUERGO B.; *Límites dogmáticos y político-criminales de los delitos de peligro en abstracto*, Comares, Granada, 2005, pág. 45. Citado por ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L Y TORO, M.C.; *La pena de prisión en busca de sentido. El fin de la pena privativa de libertad en los albores del siglo XXI*, Gredos, Universidad de Salamanca, España, pág. 67.

<sup>15</sup> RIVACOBÁ y RIVACOBÁ, M.; *Elementos de Criminología*, Edeval, Valparaíso, 1982, pág.42.

<sup>16</sup> ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L Y TORO, M.C.; *La pena de prisión en busca de sentido...*, Op. Cit., págs. 125 y ss.

*ejecución de las penas y medidas privativas de libertad en virtud del cual éstas deben adaptarse a las condiciones generales de la vida en sociedad y contrarrestar las consecuencias dañinas de la privación de libertad”*<sup>17</sup>. De esta noción se extraen los principios *nil nocere* y de atenuación, los cuales, están plasmados a su vez en términos “reinserción” y “reeducación” del artículo 25.2 CE.

El principio de atenuación se corresponde con el de “reeducación”, esto es, con la manera de enseñar los valores más significativos dentro de una sociedad determinada al sujeto infractor, con el fin de que aprenda a vivir respetándolos<sup>18</sup>.

Por otro lado, el término “reinsertar” se plasma en el principio de *nil nocere*. En palabras de MAPELLI CAFARENA significa “*volver a meter una cosa en otra*”<sup>19</sup>, es decir, volver a introducir al sujeto en la sociedad aplicando tratamientos penitenciarios adecuados y determinadas medidas legislativas tendentes a evitar la incomunicación, desocialización y la exclusión del sujeto<sup>20</sup>.

En segundo lugar, se ha cuestionado también el ámbito de aplicación del mandato constitucional inmerso en el artículo 25.2, ya que dicho precepto decreta que “*las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social*”.

Esta declaración significa que el objeto de la orientación hacia la resocialización regulado en la Constitución son las penas privativas de libertad y medidas de seguridad. Esto se traduce en el establecimiento de un límite respecto a dicha orientación, en el sentido de que solo será exigible para las medidas de seguridad en todo caso y únicamente para las penas que supongan una restricción de la libertad del infractor.

---

<sup>17</sup> MAPELLI CAFARENA, B.; *Principios fundamentales del sistema penitenciario español*, Bosch, Barcelona, 1983, pág. 99.

<sup>18</sup> GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A.; *Estudios penales*. Bosch, Barcelona, 1984, pág. 89 y 94. GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A., *Introducción al Derecho Penal*, 3ª Ed., Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005, pág. 295. Citado por ZAPICO BARBEITO, M, ¿Un derecho fundamental a la reinserción social? Reflexiones acerca del artículo 25.2 CE, *Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña*, 2009, pág. 923.

<sup>19</sup> MAPELLI CAFARENA, B.; *Principios fundamentales...*, Op. Cit., pág. 151.

<sup>20</sup> BUENO ARÚS, F.; Las reformas penitenciarias en España a la luz de los fines del Derecho, en AA.VV. *Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*, Thomson Civitas, Navarra, 2005, págs. 153-154.

En este punto, existen opiniones doctrinales contrapuestas. En primer lugar, existe una corriente a favor de una interpretación extensiva del precepto. Autores como RODRÍGUEZ DEVESA entienden que dentro las medidas de seguridad se incluyen medidas no privativas de libertad tales como la privación de licencia de armas, inhabilitación profesional, privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores y también otro tipo de penas como las pecuniarias (multas)<sup>21</sup>.

Por otro lado, parte de la doctrina como COBO DEL ROSAL, critica la “*alusión generalizada que se hace a las medidas de seguridad*” y la disparidad de fundamentos porque tanto las penas como las medidas constituyen una respuesta penal de cara al delito realizado. En este sentido también se pronunció la jurisprudencia del TC. La razón fundamental en la que se basa esta última corriente es que, dado que la búsqueda de la resocialización pretende impedir esencialmente la desocialización, no tendría sentido incluir en el precepto medidas que no priven la libertad o que no pongan en peligro el mantenimiento de las relaciones familiares y afectivas del interno. En definitiva, consideran que nuestro ordenamiento jurídico únicamente establece el fin resocializador para la pena privativa de libertad y no para otras por no llevar aparejado el efecto aislante o estigmatizador<sup>22</sup>.

### **1.3. La naturaleza jurídica de la reinserción social.**

#### **1.3.1. La finalidad de la pena privativa de libertad.**

El debate se basa fundamentalmente en si la reinserción social constituye el único fin de la pena privativa de libertad o si se permite la entrada de otros propósitos.

Como idea previa, hay que indicar que existen dos nociones confrontadas acerca del fin de las penas. En primer lugar, parte de la doctrina como GARCÍA PABLOS DE MOLINA afirma que el fin de pena es retributivo, es decir, la finalidad de la pena es castigar al delincuente por el hecho llevado a cabo. Por otro lado, hay quienes piensan que el fin de la pena consiste en la prevención de futuros delitos y ello se consigue a través de la intimidación de la sociedad (prevención general) o procediendo sobre el

---

<sup>21</sup> RODRÍGUEZ DEVESA, J. M<sup>a</sup>, SERRANO GÓMEZ, A.; *Derecho Penal Español, Parte General*, 18<sup>a</sup> Ed., Dykinson, Madrid, 1995, pág. 883. Citado por ZAPICO BARBEITO, M. *¿Un derecho fundamental a la reinserción social...?*, Op. Cit., pág.922.

<sup>22</sup> COBO DEL ROSAL, M y BOIX REIG, J COBO DEL ROSAL, M., & BOIX REIG, J. Garantías constitucionales del Derecho sancionador. *Comentarios a la legislación penal*, 1, 191-216, 1982, pág. 91. Citado por PLEITO MARISCAL. *La ejecución jurisdiccional...*, Op. Cit., pág. 166.

sujeto infractor a través de su reeducación y reinserción en la comunidad (prevención especial)<sup>23</sup>.

¿Qué finalidad de las penas privativas de libertad se recoge en el artículo 25.2 CE?

El artículo 25.2 CE tiene una estructura peculiar, ya que a diferencia de otras normas jurídicas que dan una respuesta concreta a una situación de hecho, este precepto consagra el propósito de lograr una finalidad de interés general: la reeducación y reinserción social. Ahora hay que preguntarse: ¿son los únicos fines de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad tal y como señala el precepto constitucional? La respuesta es que, a pesar de ser fines concretos en el sistema penitenciario, no son los únicos fines de la pena de prisión porque hay que tener en cuenta otros como la prevención especial y general. En realidad, todos estos propósitos concluyen en un objetivo común: tratar de impedir delitos para proteger a la sociedad.

Sobre esta cuestión el Tribunal Constitucional ha señalado en sucesivas sentencias (por ejemplo, la STC 150/1991 de 4 julio) que el artículo 25.2 CE recoge la prevención especial como finalidad de las penas privativas de libertad y declara que, además de la reinserción y reeducación, hay que admitir otros objetivos. En todo caso, el fin resocializador debe utilizarse para orientar el modo de cumplimiento de las penas de prisión en cuanto a su duración, su forma de ejecución, etc. Esto es un límite para el legislador positivo ya que no se pueden crear condenas incompatibles con la reinserción.

La justificación de este pronunciamiento la encontramos en la STC 160/2012 de 20 de septiembre, en la cual el TC dictamina que la finalidad última del sistema es *“la protección de los bienes jurídicos penales”* y esto solo se consigue mediante la reinserción y otros objetivos *“en particular la finalidad de prevención general, tanto en su vertiente de disuasión de potenciales delincuentes mediante la amenaza de la pena, como de reafirmación de la confianza de los ciudadanos en el respeto de las normas penales”*. Cuando el TC adopta esta postura, está pensando en determinados sujetos que no precisan o no aspiran a ser reinsertados, como por ejemplo, personas que cometen un

---

<sup>23</sup> ROXIN, C.; *Derecho Penal, Parte general*, tomo II. Especiales formas de aparición del delito. Fernando Velásquez Velásquez, 2014, pág. 81-103; QUINTERO OLVIDARES, G.; *Manual de Derecho Penal, Parte general*, Pamplona, 2000, pág. 116-132; ÁLVAREZ GARCÍA, FJ.; *Consideraciones sobre los fines de la pena en el ordenamiento constitucional español*, Granada, 2001, pág.87-174. Citado por DELGADO DEL RINCÓN, L.E. *El artículo 25.2 CE...*, Op. Cit., pág. 343.

delito en una situación concreta pero en otra ocasión no lo volverían a hacer o personas que padecen de una enfermedad grave que no pueden volver a realizar la conducta criminal<sup>24</sup>.

1.3.2. ¿Constituye la reinserción social un derecho fundamental o es un mero mandato dirigido al legislador para orientar la política penitenciaria y penal?

El artículo 25.2 se ubica, dentro de la Constitución Española, en la Sección I del Capítulo II del Título I, denominada “de los derechos fundamentales y libertades públicas”. En virtud de dicha localización, el artículo 53 CE señala el régimen jurídico de los derechos fundamentales e indica en su apartado primero que “*vinculan a todos los poderes públicos*”, y en su apartado segundo que podrán ser protegidos por “*Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional*”. A pesar de ello, veremos a continuación que el Tribunal Constitucional no ha reconocido este régimen jurídico al artículo 25.2 CE<sup>25</sup>.

Por lo dicho con anterioridad, existen diferentes posiciones doctrinales: un grupo de autores piensa que la reinserción es un derecho subjetivo del preso en base a su ubicación en el texto constitucional y, por otro lado, otro sector entiende de forma más restringida, que en realidad constituye un mandato dirigido al legislador para que oriente la política penal y penitenciaria. Es importante determinar esta cuestión a efectos prácticos, ya que dependiendo de la posición por la optemos, se reconocerá o no amparo constitucional ante una posible vulneración de este derecho<sup>26</sup>.

Sobre esta cuestión, se pronunció el Alto Tribunal en un primer momento a través del Auto 15/1984 de 11 de enero, en el cual determina que el derecho a la reinserción no es un derecho fundamental ya que del mismo no se derivan derechos subjetivos. Esto

---

<sup>24</sup> LAMARCA PÉREZ, C.; *Régimen penitenciario y derechos fundamentales*, en Estudios penales y criminológicos, N° 16, 1992, pág. 220. Citado por ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ.A., *Ejecución de penas en España...*, Op. Cit., pág. 13.

<sup>25</sup> ATC 360/1990, de 5 de octubre “*el hecho de que el contenido normal de los preceptos situados en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I sean derechos y libertades no quiere decir que todos y cada uno de sus extremos constituyan este tipo de instituciones jurídicas; algunos principios se han insertado en este apartado constitucional por distintas razones, entre otras, la simple conexión temática*”.

<sup>26</sup> MAPELLI CAFARENA, B.; *Principios fundamentales del Sistema Penitenciario Español*, Bosch, Barcelona, 1983, pág. 165.



significa a efectos prácticos que este derecho no es susceptible de amparo y los particulares, frente a decisiones judiciales o actos de la Administración penitenciaria que puedan vulnerar el artículo 25.2 CE, solo podrán buscar tutela a través de la vía judicial ordinaria<sup>27</sup>.

Entonces, ¿cómo interpreta el TC el contenido del artículo 25.2 CE? En el auto alegado el Alto Tribunal expresa que “*el artículo 25.2 es un mandato de constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria*”. No obstante, lo cierto es que este mandato vincula no solo al legislador, sino también a todos los poderes del Estado, como así lo ha manifestado el propio tribunal en sentencias posteriores (STC 19/1988, de 16 de febrero). Esto lleva a la conclusión de que en base al artículo 9.1 y 53.1 CE, el artículo 25.2 CE podría alegarse ante los tribunales y a su vez, si éstos consideraran que una norma penitenciaria es contraria a dicho precepto, podrían promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC<sup>28</sup>.

Con esta doctrina, se equipara el derecho a la reinserción del preso con los principios rectores de la política social y económica regulados en el Capítulo III<sup>29</sup> y ello explica, salvo algunos casos excepcionales<sup>30</sup>, que los recursos de amparo apoyados en la infracción del artículo 25.2 CE sean inadmitidos mediante auto por la ausencia de naturaleza constitucional de la demanda de amparo.

El Alto Tribunal, en sucesivas sentencias (STC 75/1998, de 31 de mayo, 79/1998, de 1 de abril; STC 194/2002 de 28 de octubre) establece que en base al derecho a la dignidad y al desarrollo de la personalidad, consagrados en el artículo 10.1 CE, la reinserción debe entenderse como un derecho del delincuente a que la consecución de

---

<sup>27</sup> Pronunciamientos posteriores del TC: STC 28/1988 de 23 de febrero, 209/1993 de 28 de junio, 2/1997 de 13 de enero, 79/1998 de 1 de abril, entre otros.

<sup>28</sup> DELGADO DEL RINCÓN, L.E. *El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones...*, Op. Cit., pág. 355.

<sup>29</sup> BUENOS ARÚS, F. *Las reformas de las leyes penitenciarias en España a la luz de los fines del Derecho*. Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Thomson-Civitas, 151-182, Cizur Menor, 2005, pág. 154.

<sup>30</sup> STC 28/1988, de 23 de febrero, AATC 303/1986 de 9 de abril y 708/1986, de 15 de octubre: en estas sentencias el TC sostiene que “*la expresa y reiterada invocación del art.25.2 CE de la Constitución y la afirmación de que ‘su ingreso en prisión vulneraría el principio constitucional’ de la reinserción social, por estar ésta ya conseguida, nos llevaron a admitir el recurso en aplicación, una vez más, del principio favor actionis, para poder resolverlo a la vista de las actuaciones con mayor conocimiento de causa*”. Citado por DELGADO DEL RINCÓN, L.E.; *El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones...*, Op. Cit., pág.159.

su pena privativa de libertad se ubique hacia la resocialización a través de las instituciones de tratamiento y no como un deber de la Administración penitenciaria a reinsertar a todos los presos.

Al respecto conviene decir que aunque la negación del carácter de derecho fundamental debilita notoriamente al principio resocializador, éste sigue siendo la finalidad primordial y puede utilizarse como parámetro para apreciar si una determinada norma o una pena privativa de libertad se ajusta a los términos constitucionales, es decir, habría que ver en cada caso si la medida impuesta al condenado le impide de manera absoluta conseguir la reinserción, en cuyo caso se podría declarar inconstitucional<sup>31</sup>.

¿Por qué el TC lleva a cabo una interpretación tan restrictiva del artículo 25.2 CE?

Al margen de las dudas que induce la vaguedad del artículo 25.2 CE y de la dificultad de esclarecer los fines de la pena, la interpretación del TC se debe fundamentalmente al problema que supondría en algunos casos prácticos admitir la finalidad resocializadora de este precepto. Ello lo explica con buen criterio GRANADOS PÉREZ cuando dice que: *“hay casos evidentes en los que por la personalidad del autor, tiempo transcurrido desde la comisión del hecho, reinserción social y familiar, u otros varios motivos, resulta plenamente injustificado y supone un atentado contra la dignidad humana, bienestar y paz social el ingresar en prisión a personas que han superado su marginación, inadaptación o peligro social”*<sup>32</sup>. Esto quiere decir que, si por ejemplo transcurre un tiempo considerable entre la resolución condenatoria del juez y el ingreso en prisión y el sujeto ha reestructurado su vida, el reconocimiento del fin resocializador conllevaría la solución de no ejecutar la pena. Sin embargo, el TC ha sostenido la imposibilidad de ampararse en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas para estimar la no ejecución de la pena y que, en todo caso, la ejecución de las resoluciones judiciales forma parte del artículo 24.1 CE: derecho a la tutela judicial efectiva<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> ZÁPICO BARBEITO, M.; *¿Un derecho fundamental...*, Op. Cit., pág.76-77.

<sup>32</sup> GRANADOS PÉREZ, C.; *“Alternativas a la prisión”*, Actualidad Penal, Nº 8, 1990, págs. 75 y ss.

<sup>33</sup> PEITEADO MARISCAL, P.; *La ejecución jurisdiccional...*, Op. Cit., págs. 161 y ss.

No obstante, podemos observar jurisprudencia del TC contradictoria en sentencias posteriores, en las que además de negar que el art. 25.2 CE contiene un derecho fundamental del preso, se rechaza también que la resocialización sea una finalidad de las penas privativas de libertad. Así, se sustituye la orientación resocializadora por un nuevo mandato o unos propósitos nuevos: la disciplina, la custodia, la seguridad y la retención<sup>34</sup>.

## **2. CAPÍTULO II. LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE PONE EN DUDA EL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN.**

*Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no pretende imitar o reproducir tal naturaleza. Está hecha para corregirla. Albert Camus.*

La prisión permanente revisable es una de las novedades que ha introducido la reforma del Código Penal de 2015 en nuestro ordenamiento jurídico y que ha generado bastantes debates doctrinales en la actualidad. Esta figura fue aprobada el día 26 de marzo de 2015 en el Congreso de los Diputados y ha supuesto la sustitución de las penas de los delitos considerados de especial gravedad por la pena de prisión permanente revisable. Su inclusión a través de la Ley Orgánica 1/2015 ha modificado todo el elenco de penas, un cambio trascendental que refleja el Derecho Penal más riguroso y deshumanizado que puede existir en un modelo de responsabilidad penal “moderno”.

### **2.1. Breve referencia a los antecedentes históricos de la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico.**

La prisión permanente revisable no es una condena novedosa en nuestro país, si bien es cierto que no tiene ningún antecedente inmediato, aparece vinculado a nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX bajo la denominación de “cadena perpetua”. El actual Código Penal entró en vigor en 1995 y hasta nuestros días ha sufrido casi treinta reformas caracterizadas por perseguir la retribución y endurecer de manera más severa el *ius puniendi* frente al delito. En la reforma de 2015 es cuando se incorpora esta medida legislativa a nuestro Código Penal con un régimen legal particular o

---

<sup>34</sup> ARANDA OCAÑA, M, “Análisis descriptivo de la situación penitenciaria en España”, en DORES, A.P (org.) *Prisões na Europa. Um debate que apenas começa*, Celta Editora, Oeiras, 2004, pág. 106. Citado por ZAPICO BARBEITO, M *¿Un derecho fundamental a la reinserción social...?*, Op. Cit., pág.929 y 930.

individualizado respecto de sus antecedentes, pero manteniendo la característica principal que es la perpetuidad del castigo<sup>35</sup>.

El primer Código Penal del año 1822 en su artículo 47 ya contemplaba la condena de trabajos perpetuos que, aunque no se consideraba una pena privativa de libertad como tal, obligaba a los presos a convivir en establecimientos en malas condiciones de vida y a realizar trabajos forzados llevando siempre una cadena sujeta al cuerpo.

Más tarde, en el Código Penal de 1848 aparece por primera vez la denominación de “cadena perpetua” en los artículos 94 y siguientes, entendida como la privación de libertad para el resto de la vida del interno.

Los siguientes Códigos de los años 1850 y 1870 mantuvieron la naturaleza de este castigo, haciendo algunas modificaciones en su regulación como por ejemplo, disminución de los plazos de los trabajos forzados y se prohíbe atar a los presos entre sí mediante una cadena por constituir una intromisión a la intimidad y al desarrollo libre de la persona. De este modo, comienza a observarse una cierta flexibilización en la crueldad de las penas y una mayor toma de conciencia de la importancia de ciertos derechos de la persona<sup>36</sup>.

Desde entonces, aunque esta figura fue eliminada de forma expresa por el Código Penal de 1928 y no volvió a regularse en otros Códigos Penales posteriores, el término “cadena perpetua” ha perdurado en el lenguaje coloquial de nuestra sociedad hasta hoy en día. Así, se consolidó entre la opinión popular la idea de que la perpetuidad era una condena inhumana y deshonrosa y se establecieron límites de treinta años a las penas de prisión, haciendo desaparecer las penas indefinidas. Lo cierto es que en nuestro país llama la atención que, a diferencia del resto de Europa, desaparece primero la cadena perpetua antes que la pena de muerte<sup>37</sup>.

En la actualidad, en principio podríamos decir que nuestro Código Penal de 1995 no regula la prisión perpetua ya que se establece como regla general un límite máximo de

---

<sup>35</sup> MATELLÁN, L. P.; *“La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal deshumanizado”*, Clivatge, Nº 3, 2015, pág. 55.

<sup>36</sup> CUERDA RIEZU, A.; *La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: Por qué son inconstitucionales en España*, Justicia penal, 23, Atelier, Barcelona, 2011, pág. 20 y ss.

<sup>37</sup> ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable: ¿pena o cadalso?*, Iustel, Madrid, 2016, pág. 42 y ss.

veinte años, con algunas excepciones: para algunos supuestos especiales veinticinco o treinta años e incluso, en el ámbito del concurso real, hasta los cuarenta años que resulta de la acumulación de penas.

La conclusión a la que podemos llegar es que aunque *de iure* no se regula la cadena perpetua en nuestro sistema legal, *de facto* algunas penas pueden llegar a asimilarse a una expropiación perpetua de libertad del individuo y ello se debe a diversas circunstancias como la excesiva prolongación temporal, contextos personales, la edad, el tratamiento penitenciario, etc. Bajo mi punto de vista, la pena de cadena perpetua o cualquier otra condena de prisión de larga duración, no se puede asimilar a una simple pena privativa de libertad porque hay un dato importante que las diferencia y es que el condenado a la primera no tiene un horizonte de libertad. Para ilustrarlo mejor, CUERDA RIEZU lo explica de manera metafórica de la siguiente manera: la experiencia que vive la persona condenada a una cadena perpetua se puede asemejar a la de un túnel eterno sin final y en cambio, el cumplimiento del resto de penas privativas de libertad, la sensación sería la de un túnel amplio en el que se ve o se puede llegar a intuir el fin<sup>38</sup>.

En suma, aunque durante siglos nuestros Códigos Penales hubieran eliminado de sus regulaciones la cadena perpetua y ello se tradujera en un indicio de modernización y progresión en nuestro sistema punitivo, con el regreso de esta figura disfrazada de “prisión permanente revisable” a través de la reforma de 2015 se ha vuelto a instaurar el Derecho Penal del pasado más arcaico y severo<sup>39</sup>.

## **2.2. Contexto social y político en el que se aprobó la reforma del Código Penal.**

Para comenzar, hay que señalar que a pesar de que España es uno de los países europeos con uno de los sistemas penales más rígidos, durante estos años nuestra sociedad ha reclamado todavía más el endurecimiento de los castigos con el objetivo de hacer frente a la delincuencia más peligrosa<sup>40</sup>. Esto nos lleva a afirmar que la comunidad, influenciada en gran medida por los medios de comunicación, tiende a pensar que el nivel de seguridad de un país depende de la dureza de las condenas y de la

---

<sup>38</sup> CUERDA RIEZU, A.; *La cadena perpetua...*, Op. Cit., pág. 25.

<sup>39</sup> ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable...*, Op. Cit., pág.52.

<sup>40</sup> DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; *Ejecución de penas en España...*, Op.Cit., pág. 275.

intimidación de ciertos comportamientos delictivos. De esta manera, sucesos recientes como el asesinato de Mari Luz, la desaparición de Marta del Castillo, la liberación del etarra Ignacio de Juana Chaos, provocaron que gran parte de la opinión pública demandara la introducción de la cadena perpetua en nuestro ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que se ha vuelto a concebir por un lado, al derecho punitivo como un medio para combatir la delincuencia y por otro, la prisión como un instrumento de inocuización o de separación del enemigo del resto de la sociedad, dejando atrás los fines resocializadores. Como indicó el filósofo Nietzsche (1844-1900) “*nuestro delito contra los delincuentes es tratarlos como canallas*”<sup>41</sup>.

Aprovechando este contexto social, determinados partidos políticos comenzaron a incluir en sus programas electorales medidas que suponían una agravación de las penas. El origen de esta figura, denominada en un principio “prisión perpetua revisable”, lo encontramos en las enmiendas presentadas por el Partido Popular al Proyecto de Reforma del Código Penal de 2010<sup>42</sup>. Cuando este partido gana las elecciones, se hace oficial en el mes de julio de 2012 el primer Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma del Código Penal el cual, no consiguió el apoyo necesario para su aprobación. En octubre de este mismo año se presenta el segundo Anteproyecto incluyendo esta pena con algunas modificaciones, tanto en su *nomen iuris* “prisión permanente revisable” como en el contenido de la misma. En un principio iba dirigida únicamente para la regulación de los delitos de terrorismo y posteriormente su ámbito de aplicación se amplió para otros delitos, fundamentalmente el asesinato cometido por una organización criminal, asesinato de menores de dieciséis años o personas vulnerables, crímenes de lesa humanidad, genocidio, etc<sup>43</sup>.

En definitiva, después de un largo camino legislativo lleno de disputas parlamentarias, se implanta definitivamente la pena más grave en nuestro ordenamiento jurídico a través de la LO 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal.

---

<sup>41</sup> JAÉN VALLEJO, M., & PERRINO PÉREZ, A. L.; *La Reforma penal de 2015: Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo*, Dykinson, Madrid, 2015, pág.25.

<sup>42</sup> BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, Proyectos de ley, nº 52-9, de 18 de marzo de 2010, págs. 173 y siguientes.

<sup>43</sup> DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, EVA M<sup>a</sup>; *El nuevo sistema de penas a la luz de las últimas reformas. Estudios sobre el Código Penal reformado: Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015*, Dykinson, 2015, pág. 131.

Los motivos que el legislador argumentó para dar entrada a esta medida legislativa fueron los siguientes: en primer lugar, advierte la necesidad de seguir el modelo del resto de los países europeos; en segundo lugar, con tono justificativo, señala que únicamente va dirigido a los delitos considerados de especial gravedad; por otro lado, el respaldo de esta figura por las doctrina de los tribunales nacionales e internacionales más importantes; en cuarto lugar, recurre a la opinión popular alegando que la ciudadanía reclamaba una respuesta penal más severa para castigar al delincuente y tratar de proteger de una manera más eficaz a las víctimas<sup>44</sup>. Asimismo, en la Exposición de Motivos del Código Penal se hace referencia *la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia*. En otras palabras, el fin último a conseguir es endurecer la finalidad preventiva y retributiva de la pena, en detrimento de la resocialización del penado.

No obstante, todos estos argumentos serán objeto de análisis y matizaciones a lo largo del trabajo.

### **2.3. Características y régimen legal de la “prisión permanente revisable” dentro del Código Penal.**

Por lo que se refiere a la regulación de esta nueva forma de reclusión, hay que decir que ha sido objeto de considerables críticas, fundamentalmente debido a la falta de un tratamiento unitario y sistemático dentro del articulado del Código Penal. Esto significa que los preceptos referidos a su régimen legal se encuentran dispersos dentro de este texto jurídico y además, en ninguno de ellos encontramos una definición concreta de esta figura ni tampoco una determinación precisa del límite máximo de la misma, lo cual, genera una gran indeterminación e inseguridad jurídica<sup>45</sup>.

De esta manera, para determinar de manera global la naturaleza y el contenido de la prisión permanente revisable, se han tenido que ir recopilando los preceptos del Código Penal referidos a su régimen legal, de los cuales podemos extraer las siguientes características:

Primeramente, en base a los artículos 33.2 y 35 del Código Penal, podemos encuadrar esta figura dentro del grupo de “penas privativas de libertad graves”.

---

<sup>44</sup> DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, EVA M<sup>a</sup>; *El nuevo sistema de penas...*, Op. Cit., pág. 131

<sup>45</sup> DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; *Ejecución de penas en España...*, Op. Cit., pág. 277 y ss.

En segundo lugar, se recoge como una pena excepcional, ya que está reservada para un catálogo concreto de delitos de gravedad extrema. El ámbito de aplicación de la prisión permanente revisable se puede resumir en cinco grupos:

- El delito de asesinato cuando concurra alguna circunstancia prevista en el artículo 140:
  - a) Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
  - b) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
  - c) Que el delito se cometa por quien pertenezca a un grupo u organización criminal.
  - d) Que el reo hubiera sido condenado por la muerte de dos o más personas.
- Los delitos de terrorismo cuando los sujetos que pertenezcan o colaboren con grupos u organizaciones terroristas (art. 573 bis 1 CP).
- El delito de regicidio en relación a la muerte del Rey o del heredero (art 485.1 CP) y para el magnicidio (art 605.1 CP).
- Igualmente se prevé esta pena para castigar a sujetos que maten, lesionen o agredan sexualmente a una persona que pertenezca a un grupo étnico, religioso, etc (art 607.1 CP).
- En último lugar para delitos de lesa humanidad regulado en el art 607.2. CP<sup>46</sup>.

El hecho de que se establezca la pena de prisión permanente revisable únicamente para esta lista de delitos *numerus clausus*, da a entender que, más que una pena, en realidad se impone una medida de seguridad que busca la inocuización y el control de la personalidad de un colectivo irrecuperable, sin posibilidades de reinserirse en la sociedad<sup>47</sup>. Es más, esta pena se regula como una consecuencia jurídica obligatoria de este catálogo de delitos, es decir, imperativamente será impuesta por el juez, sin que quepa otra condena alternativa según las circunstancias del caso particular, lo cual, choca de manera terminante con la individualización judicial de las penas<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; *Ejecución de penas en España...*, Op. Cit., pág. 277 y ss.

<sup>47</sup> ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable: ¿pena o cadalso?* Op. Cit., pág.38.

<sup>48</sup> DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, EVA M<sup>a</sup>. *El nuevo sistema de penas...*, Op. Cit., pág. 141.



Además hay destacar dos rasgos esenciales que se deducen de su *nomen iuris*: se trata de una pena permanente y revisable.

Su carácter permanente se debe estamos ante una pena abstracta, indeterminada, que no presenta límites máximos ni mínimos en su régimen legal.

En este punto conviene manifestar la diferencia entre una primera fase en la cual el juez establece la denominada “pena nominal” y otra fase posterior de ejecución, en la que se determina una “condena real o efectiva” por la Administración penitenciaria y es la que realmente debe cumplir el penado. En opinión de autores como FERNÁNDEZ BERMEJO, dado que estamos ante una pena que no prevé un límite máximo, la primera fase no se cumpliría porque en realidad únicamente en la segunda se podrá llegar a determinar la pena a través del régimen de revisión (artículo 92 CP)<sup>49</sup>.

Todo esto va a generar un conflicto indeseado entre la normativa penal y la penitenciaria, ya que no es posible compatibilizar una condena impuesta por un juez de manera coactiva con el tratamiento penitenciario que precisa analizar la situación concreta del condenado antes de empezar a cumplir la pena<sup>50</sup>.

Por lo que respecta al carácter revisable, la suspensión del castigo y la concesión de la libertad condicional depende una serie de presupuestos legales en los que habrá que tener en cuenta tanto la duración de los plazos a partir de los cuales se efectúa la revisión, como la posibilidad que tiene el penado de lograr estos requisitos en la práctica.

Acerca del inicio del proceso de revisión de la pena, el primer presupuesto que se exige es temporal, es decir, el cumplimiento de una parte mínima de la condena, la cual oscilará entre los veinticinco y treinta y cinco años dependiendo del número de delitos cometidos que englobe la pena (uno o varios) y de la naturaleza de los mismos (si se trata de un delito de terrorismo o no)<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> FERNÁNDEZ BERMEJO D. Una propuesta revisable: la prisión permanente. *La ley penal. Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario*, N° 110, 2014, pág.7.

<sup>50</sup> DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, EVA M<sup>a</sup>; *El nuevo sistema de penas a la luz de las últimas reformas*. Op. Cit., pág. 144.

<sup>51</sup> JAÉN VALLEJO, M. Y PERRINO PÉREZ, A. L.; *La Reforma penal...*, Op. Cit., pág. 22.

A continuación, el interno tiene que superar dos condiciones más, que consisten en lograr clasificarse en el tercer grado de tratamiento penitenciario y que el juez funde un pronóstico favorable de reinserción social.

Respecto al requisito de la progresión en grado, sin duda, la reforma de 2015 ha endurecido el paso al régimen abierto del art. 36 CP. Esto es así porque como regla general, el interno debe superar un “periodo de seguridad” de una duración mínima de quince años de prisión, siempre que se dé una de estas dos situaciones: que la prisión permanente se haya impuesto como única condena o bien que junto a esta pena, confluyan otras cuya suma total no supere los cinco años. Esta regla tiene una excepción ya que para los delitos de terrorismo y los delitos ejecutados por organizaciones terroristas (artículo 571 a 580 del CP), el periodo se eleva a veinte años. Por otra parte, hay que tener en cuenta el artículo 78 bis del CP, ya que en caso de concurso de delitos, este periodo mínimo aumentará en función de las circunstancias del caso: como regla general, este plazo tendrá una duración que oscilará entre los dieciocho y veintidós años, y en la regla especial anteriormente mencionada, de veinticuatro a treinta y dos<sup>52</sup>.

Llegados a este punto, para obtener el tercer grado, el penado tiene que satisfacer el pago de la responsabilidad civil fijada en la resolución. A tales efectos, según el artículo 72.5 LOGP, se tendrá en cuenta por ejemplo, la situación personal y patrimonial del sujeto, la conducta favorable a reparar el daño, resarcir perjuicios, etc.

Finalmente, el último presupuesto legal exigido es la obtención de un pronóstico del Tribunal sentenciador que acredite la capacidad del interno para reinserirse en la sociedad. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 92.1 CP, tales como la personalidad del sujeto, sus contextos sociales y familiares, antecedentes, etc. Autores como DOMÍNGUEZ IZQUIERDO plantean la hipótesis de que hubiera sido más adecuado que la concesión del tercer grado, por su mayor intermediación y especialización, le correspondiera Juez de Vigilancia Penitenciaria<sup>53</sup>.

Por su parte, el párrafo 2 del artículo 92 dispone para los delitos de terrorismo que, además de los requisitos mencionados con anterioridad, el sujeto muestre “*signos*

---

<sup>52</sup> MARTÍNEZ, C. S. Aspectos procesales de la prisión permanente revisable. Una aproximación al tercer grado, permisos de salida, revisión y remisión definitiva. *Anales de Derecho*, Vol. 34, N° 2, 2016, pág. 5-8.

<sup>53</sup> DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, EVA M<sup>a</sup>; *El nuevo sistema de penas...*, Op. Cit., pág. 148.

*inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades (...) lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades”.*

El tribunal tomará la decisión sobre la suspensión de la pena permanente revisable y el acceso a la libertad condicional. Si este proceso finaliza con una decisión positiva, se concederá al condenado una libertad no plena, sino restringida a la observancia de determinadas medidas de control y condiciones, concretamente, la de no volver a cometer otros delitos, *“orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social”*<sup>54</sup>. Si por el contrario, la decisión del juez es negativa, el tribunal deberá revisar cada dos años si la pena de prisión debe mantenerse en los mismos términos. En todo caso, el juez atenderá a las solicitudes del interno, aunque si esta petición es desestimada, podría ordenar la inadmisión de peticiones posteriores en un plazo máximo de un año<sup>55</sup>.

Para concluir este apartado, hay que hacer referencia a dos situaciones excepcionales en las que el Tribunal podrá consentir la clasificación al tercer grado sin necesidad de que se cumplan los requisitos legales explicados inicialmente: por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de septuagenarios (artículo 36.2 CP).

## **2.4. La incompatibilidad de la prisión permanente revisable con nuestra Constitución Española.**

### 2.4.1. El principio de reeducación y reinserción social: artículo 25.2 CE.

La Constitución Española contiene una serie de preceptos que delimitan el ámbito del Derecho penal: su contenido, sus funciones y los fines de las penas y medidas de seguridad. Asimismo, dentro de su articulado, encontramos una serie de normas

---

<sup>54</sup> ORGÁNICA, L. (2015). 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado*, 77, 27061-27176.

<sup>55</sup> JAÉN VALLEJO, M., & PERRINO PÉREZ, A. L.; *La Reforma penal de 2015...*, Op. Cit., pág.22

prohibitivas que suponen un límite al ejercicio del *ius puniendi*: prohibición de la pena de muerte, de otras penas inhumanas o degradantes (art. 15) y de los trabajos forzados (art 25.2), el principio de legalidad y non bis in ídem (art 9.3, 24.2 y 25.1), estipulaciones tasadas para la extradición (art 13.3) y la supresión de la justicia militar excepto para la esfera estrictamente castrense y estado de sitio (art 117.5)<sup>56</sup>.

Sin embargo, estas previsiones carecen de validez si no se consideran desde el marco del artículo 25.2 CE<sup>57</sup>. Como ya se explicó en el Capítulo I de este trabajo, este precepto reconoce expresamente una de las finalidades de la pena privativa de libertad dentro de nuestro sistema penal y penitenciario: la reeducación y reinserción social.

Por lo que respecta a la prisión permanente revisable, a pesar de que la Exposición de Motivos del CP establezca que “*de ningún modo renuncia a la reinserción del penado*”, a continuación expondré los motivos por los cuales considero que esta figura atenta contra el mandato resocializador de la Constitución Española.

Como idea previa, debe quedar claro que para evitar los efectos de desocialización o prisionización que lleva inherente la prisión, hay que tener en cuenta dos pautas fundamentales: primero, la privación de libertad no debe ser excesivamente perdurable en el tiempo para no acabar con los vínculos del preso con el mundo exterior y segundo, es necesario que, durante el cumplimiento del castigo, se establezcan medidas favorables en aras de mantener estas relaciones sociales, con sus amistades y familiares.

¿Se garantizan estas pautas mediante el régimen legal de la prisión permanente revisable? Sin duda, esta medida ha supuesto por un lado, un debilitamiento del principio de resocialización y del sistema de garantías jurídicas y principios fundamentales, en beneficio de la concepción retributiva de la cárcel. En términos generales, se puede decir que los criterios establecidos en el CP para valorar la suspensión de la ejecución de la pena van en contra de la reinserción del penado, debido a las siguientes razones:

---

<sup>56</sup> ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable...*, Op. Cit., pág.54

<sup>57</sup> Artículo 25 CE: *Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.*

1. La desproporción de los plazos para revisión de la condena. Respecto al primer requisito legal exigido para comenzar el proceso de revisión, se trata de un plazo excesivamente largo. Así, un gran número de autores como DE LA CUESTA vienen considerando que toda privación de libertad que dure más de quince años supone un riesgo grave de desocialización<sup>58</sup>.
2. En cuanto al “periodo de seguridad” para obtener la clasificación al tercer grado, se deben destacar una serie de notas fundamentales. Primero, se trata de un plazo temporal desmesurado que ha sido criticado por gran parte de la doctrina que piensa que las penas privativas de larga duración destruyen la personalidad del interno y toda esperanza de resocialización posterior. En segundo lugar, es un requisito tan rígido que prescinde del sistema de individualización de las penas y que como indica RUBIO LARA “*no se concreta por la gravedad ni grado de ejecución del delito*”<sup>59</sup>. Más aún, al realizar una distinción del “periodo de seguridad” según la naturaleza del delito bajo la justificación del mayor peligro de los delitos de terrorismo, el legislador ha dado una mayor importancia a la tipología criminal y se ha olvidado de la progresión personal del preso y las circunstancias del hecho. Es más, en la práctica muchos internos no podrán lograr el tercer grado ya que es realmente complicado mantener una conducta adecuada durante tantos años en un ambiente que, como ya sabemos, se caracteriza por la deshumanización del delincuente<sup>60</sup>.
3. También se regulan plazos desproporcionados respecto a los permisos de salida, los cuales, no se admiten hasta haber cumplido ocho años de prisión.
4. La ausencia de medidas tendentes a conservar el contacto con el exterior. El CP no prevé la concesión de beneficios penitenciarios durante el cumplimiento de la pena en prisión (salvo los que supongan una grave necesidad y los de naturaleza humanitaria) que es uno de los instrumentos principales para lograr la resocialización del preso.
5. En relación con el pronóstico judicial, otro de los presupuestos para la progresión en grado hay que decir lo siguiente: una vez que el condenado ha

---

<sup>58</sup> DE LA CUESTA ARZAMEDI, J.L.; “El principio de humanidad en derecho penal”, en *Eguzkilore*, N° 23, 2009, pág. 219.

<sup>59</sup> RUBIO LARA, P.A, “Pena de prisión permanente revisable: análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus problemas de constitucionalidad”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2016, pág. 13.

<sup>60</sup> DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, EVA Mª. *El nuevo sistema de penas...*, Op. Cit., pág. 145.

superado todo lo anterior, el juez debe valorar si está capacitado para reinsertarse en la sociedad, fundamentándose en criterios que más que la reinserción, parecen que buscan la retribución de la infracción. Esto es así porque además de no recoger en ningún caso la suspensión de la condena de manera obligatoria, son variables que informan muy poco sobre el pronóstico concreto y favorable de resocialización del interno tras cumplir la pena de prisión. Asimismo, impera claramente la incertidumbre y la decisión de un tribunal que no necesita estar motivada por unos criterios objetivos.

6. A pesar de que se trata de una pena permanente revisable, lo cierto es que una vez que el penado cumple todos los presupuestos para la suspensión de la pena, no logra la libertad plena, sino que queda sometido a otra pena sustitutiva de la prisión: la libertad condicional<sup>61</sup>.

En conclusión, la obcecación retributiva de esta figura olvida que el resarcimiento del delito tiene una serie de límites constitucionales. ¿Qué ocurriría si el tribunal o el gobierno analizan la pena asignada y niegan la suspensión decidiendo que el interno continúe en la prisión para siempre? No pasaría absolutamente nada porque no se ha regulado ningún mecanismo que permita su terminación (exigencias de justificación, posibilidad de recurso). Entonces, dado que la decisión sobre la persistencia en prisión está en manos de la decisión judicial, cabe la posibilidad de suspender la pena pero también se asume el riesgo de que se deniegue y por ende, que la pena se convierta en una cadena perpetua<sup>62</sup>.

#### 2.4.2. El principio de legalidad: artículo 25.1 CE

El principio de legalidad se ha enunciado bajo el aforismo dedicado a Feuerbach (1847), *nullum crimen, nulla poena sine lege* que se traduce como “ningún delito, ninguna pena sin ley previa”.

En nuestro ordenamiento jurídico, lo podemos encuadrar dentro del artículo 25.1 CE, artículo 3 CP y 990 LECrim. Este principio, entendido como una manifestación de la seguridad jurídica, exige que se dote de un carácter determinado, cierto y taxativo a todas las leyes penales, incluyendo tanto el supuesto de hecho como la consecuencia

---

<sup>61</sup> GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., & GÓRRIZ ROYO, E.; *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 213 y ss.

<sup>62</sup> DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; *Ejecución de penas en España...*, Op. Cit., pág. 286.

asociada y excluyéndose por ello, las normas “ex post facto”, las cláusulas generales, abstractas o indeterminadas<sup>63</sup>.

La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cumple la prisión permanente revisable estas exigencias legales?

En primer lugar, como se ha señalado anteriormente, la regulación de esta figura dentro del Código Penal adolece de serias carencias: no solo se asienta una regulación desordenada dentro del articulado de esta norma, sino que en ningún precepto encontramos una definición exacta de “prisión permanente revisable”, indicando entre otras cosas, en qué consistirá, cómo se cumplirá y dónde, penas accesorias, limitaciones de vida del condenado a ella, etc.<sup>64</sup> Sin duda, esto es incompatible con el principio de legalidad y ello ya fue mencionado en el informe del CGPJ al Anteproyecto de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal *“ante las deficiencias detectadas en la regulación de una figura de capital importancia, este Consejo considera conveniente adecuar la regulación de la PPR al principio de legalidad establecido en el artículo 25.1 de la Constitución y a la consecuente garantía de previsibilidad de las sanciones ínsita en dicho mandato”*<sup>65</sup>.

De igual modo, el artículo 92 CP establece que la revisión comenzará cuando hayan transcurridos veinticinco años de prisión, pero ¿dónde está el límite máximo? Lo cierto es que en el precepto no se fija una consecuencia jurídica determinada, sino que ello queda condicionado a la estimación del juez mediante los criterios legales ya citados, caracterizados por su incoherencia y carencia de objetividad. En consecuencia, podemos sostener que es una pena que vulnera abiertamente el principio de legalidad debido a su naturaleza indeterminada y a la inseguridad jurídica que ello provoca<sup>66</sup>.

#### 2.4.3. El principio de humanidad de las penas y de proporcionalidad.

Para comenzar, cabe sostener que el principio de proporcionalidad responde a la necesidad de que exista una correlación suficiente entre la gravedad de la pena privativa

---

<sup>63</sup> LAMARCA PÉREZ, C.; “Principio de legalidad penal”, *Revista en Cultura de la Legalidad*, EUNOMÍA, 156-160, 2014, pág.2.

<sup>64</sup> ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable...*, Op. Cit., pág.152.

<sup>65</sup> Informe del Pleno del CGPJ al Anteproyecto de LO de modificación del Código Penal de 16 de enero de 2013, pág. 42.

<sup>66</sup> DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; *Ejecución de penas en España...*, Op. Cit., pág. 290 y 291.

de libertad o medida de seguridad y la gravedad del delito cometido según su entidad, su duración y el valor del bien jurídico protegido. Es, por lo tanto, otro límite más al *ius puniendi* del legislador tanto desde el punto de vista de la dignidad humana, como desde el principio de legalidad, en el sentido de que la pena será más proporcionada cuanto menos lesione los derechos del condenado<sup>67</sup>.

Esta definición nos lleva a poner en relación este principio con la prohibición de penas inhumanas o degradantes, ubicado en el artículo 15 CE “*todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni a penas inhumanas o degradantes*”. Esto significa que todos los poderes públicos están obligados a evitar los efectos desocializadores de la prisión y que el legislador no puede implantar una pena inocularizadora que destruya física o moralmente al condenado y que excluya la posibilidad de reinserirse en la sociedad<sup>68</sup>. Por ello, se prohíbe el establecimiento de determinados castigos como la pena de muerte, la tortura y cualquier otra condena que suponga unas condiciones de vida denigrantes y una vulneración al derecho a la vida y a la dignidad de la persona<sup>69</sup>.

Este principio se enlaza con el pensamiento ilustrado y el iluminismo. En palabras de BECCARIA, “*la pena debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima posible en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictadas por las leyes*”<sup>70</sup>. En la misma línea, KANT establece el imperativo categórico de que el ser humano es el fin en sí mismo y no un medio para lograr otra finalidad<sup>71</sup>, esto es, la imposición de una condena nunca puede constituir un medio para conseguir un objetivo de la comunidad<sup>72</sup>.

---

<sup>67</sup> ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable...*, Op. Cit., pág.58.

<sup>68</sup> TAPIA, M. I. R., & WOISCHNIK, J.; Principios constitucionales en la determinación legal de los marcos penales. Especial consideración del principio de proporcionalidad. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*. Edición 2001, 2014, pág.476.

<sup>69</sup> BARATTA, A.; Requisitos mínimos del respeto de los derechos humanos en la ley penal. *Nuevo Foro Penal*, 12 (34), 421-435, 1986, pág.424.

<sup>70</sup> BECCARIA, C.; *De los delitos y las penas*, Editorial Trotta, 2011, pág.281.

<sup>71</sup> KANT, M.; *Fundamentación de la metafísica de las costumbres: filosofía moral*, 4ª Ed., Espasa-Calpe, 1982, pág. 82-84.

<sup>72</sup> DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; *Ejecución de penas en España...*, Op. Cit., pág 281.



Pues bien, parte de la doctrina ha puesto de manifiesto que la inclusión de la prisión permanente revisable dentro de nuestro ordenamiento choca frontalmente con el principio de humanidad de las penas debido a su naturaleza perpetua. La larga duración de las penas de privativas de libertad, además de objetar la finalidad resocializadora, también ha sido definida como uno de los ingredientes que llevan a considerar la prisión como una pena inhumana o degradante. Ilustrativamente, ZAFFARONI alega que resultan denigrantes *“las consecuencias jurídicas que se pretenden mantener hasta la muerte de la persona, puesto que importa asignarle una marca jurídica que la convierte en una persona de inferior dignidad (capitis diminutio). Toda consecuencia de una punición debe cesar en algún momento, por largo que sea el tiempo que deba transcurrir, pero nunca puede ser perpetua en el sentido propio de la expresión, pues implicaría admitir la existencia de una persona descartable”*<sup>73</sup>.

A pesar de que se ha demostrado que las penas con una duración excesiva conllevan efectos muy negativos para el recluso, las reformas sucesivas en el catálogo de penas del artículo 36, ponen de manifiesto la falta de sensibilidad de nuestro legislador que ha pasado de recoger penas privativas de libertad con una duración de seis meses a veinte años, a un régimen legal en el que se han rectificado ambos límites: de tres meses a cuarenta años. Ahora bien, no solo el límite máximo de la pena puede cuestionar los principios señalados, también el límite mínimo cuando por su breve duración, únicamente busque la retribución y el castigo por el delito cometido<sup>74</sup>.

En relación a este principio se han manifestado tanto el TEDH en sentencias como por ejemplo el caso de Costello-Roberts contra Reino Unido de 25 de marzo de 1993, como nuestro TC en sucesivos pronunciamientos, tales como, la STC 91/2000 de 30 de marzo, STC 351/2006 de 11 de diciembre, STC 181/2004 de 2 de noviembre. De esta manera, el TC ha consolidado doctrina al reconocer que *“la imposición de una cadena perpetua puede vulnerar la prohibición de penas inhumanas o degradantes del artículo 15”* y que *“la calificación de pena inhumana o degradante no viene determinada*

---

<sup>73</sup> ZAFFARONI, E. R., ALAGIA, A., & SLOKAR, A.; *Derecho penal. Parte general*, 2ª Ed., Ediar, Buenos Aires, pág. 125.

<sup>74</sup> ARÁN, M. G.; “La ejecución penitenciaria en una sociedad cambiante: hacia un nuevo modelo”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, 30, 5-14, 2006, págs. 2 y 3.

*exclusivamente por su duración: depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que ésta revista*”<sup>75</sup>.

## **2.5. Derecho comparado.**

Uno de los argumentos que encontramos en la Exposición de Motivos para justificar la aprobación de esta medida es que “*se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo.*” Si bien es cierto que se encuentra regulada históricamente en muchos de los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno como Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Italia, Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, en realidad es un argumento insuficiente ya que su regulación es diferente a la nuestra en muchos aspectos: respecto a la serie de delitos para los que se ha establecido la pena, la duración de la misma y los presupuestos legales para proceder a la revisión.

El *Code Pénal* francés dispone desde el año 1994 para determinados delitos graves la denominada “reclusión criminal a perpetuidad” junto a las penas de prisión temporales de treinta años de duración como máximo. A pesar de su denominación, es una pena revisable ya que el artículo 132-5 asegura que podrán concederse beneficios penitenciarios tras cumplir veintidós años en prisión o dieciocho si no es reincidente. La revisión pasa por distintas fases: hasta un año se instaura un periodo de observación basado en consultas, entrevistas, análisis al interno; hasta dos años, de un régimen que se asemeja al tercer grado regulado en nuestro ordenamiento; y hasta cinco años como máximo, la libertad condicional cuando concurren unos requisitos más objetivables que en nuestro sistema como el esfuerzo de reinserción social, justificación de una actividad laboral, vida familiar. En supuestos excepcionales como la enfermedad grave o incurable se podrá atribuir la libertad anticipadamente<sup>76</sup>.

En Italia, se regula en los artículos 17.2 y 22 del Código Penal italiano la llamada pena de *ergastolo*, la cual, está prevista para delitos especialmente graves como atentados terroristas, la muerte del presidente, etc. Esta condena debe cumplirse en un centro penitenciario específico, otorgando al interno al igual que en Francia, la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir un plazo en reclusión de

---

<sup>75</sup> STC 351/2006, de 11 de diciembre y STC 91/2000, de 30 de marzo.

<sup>76</sup> CERVELLÓ DONDERIS, V.; *Prisión perpetua y de larga duración: Régimen jurídico de la prisión permanente revisable*, Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 61 y ss.

veintiséis años (art 176.3). La pena se extinguirá tras pasar cinco años desde la concesión de la libertad condicional, si no se ningún motivo de revocación de la misma.

Esto se ve de manera más clara en la regulación alemana, ya que se establece en su Código Penal (*Strafgesetzbuch*) en los artículos 38 y 57, la pena de prisión de manera excepcional para determinados delitos muy graves como por ejemplo el asesinato o el genocidio. Se prevé la obligatoriedad de realizar una revisión de la pena tras cumplir quince años de privación de libertad y si se cumplen unos requisitos (consentimiento del preso, que no se exija cumplir la condena íntegra por situaciones personales, etc), se debe conceder la libertad anticipada y condicionada “*convirtiéndola de facto en una pena de duración determinada con revisiones periódicas*”<sup>77</sup>.

No obstante, no se puede alegar lo mismo de Inglaterra, que contempla un régimen más estricto que ha sido sometido a sucesivas correcciones por parte del TEDH. En su ordenamiento jurídico, se prevé esta figura para determinados delitos como el asesinato y otros que el tribunal considere peligrosos para la sociedad. Cabe destacar que el TEDH en el caso *Vinter vs. Reino Unido* de 9 de julio de 2013, ha declarado contraria a la CEDH la cadena perpetua regulada en este país por no establecer en el momento de la imposición de la misma, un régimen de revisión del fallo condenatorio. Además, ha señalado la importancia de tener una normativa determinada al efecto y de informar al preso de la motivación del pronunciamiento judicial<sup>78</sup>.

Paradójicamente, donde se recoge el término “cadena perpetua”, ésta en la práctica es una pena transitoria, y donde se denomina de otra manera (como en España), luego se demuestran casos reales en los que muchos internos no salen de la prisión con vida. Como hemos visto, muchos Estados europeos regulan en sus respectivas legislaciones la “prisión perpetua” contemplando mecanismos de suspensión o revisión para que sea en realidad temporal y para salvar la compatibilidad con la dignidad humana y con las respectivas constituciones<sup>79</sup>. Sin embargo, en España aunque no recogemos tal denominación, tenemos formuladas en nuestro Código Penal una lista de condenas privativas de libertad con una duración extremadamente larga que en ocasiones han

---

<sup>77</sup> CUSSAC, J. L., & GÓRRIZ ROYO, E.; *Comentarios a la reforma...*, Op. Cit., pág. 216 y 217.

<sup>78</sup> STEDH de 9 de julio de 2013, *Vinter y otros vs. Reino Unido*.

<sup>79</sup> JAÉN VALLEJO, M., & PERRINO PÉREZ, A. L.; *La Reforma penal de 2015: Análisis de las principales reformas...*, Op. Cit., pág.29.

originado consecuencias indeseables como la muerte del interno en prisión. Tanto es así que autores como CUERDA RIEZU afirman que estamos ante un “fraude de etiquetas” y que para evitarlo, muchas de las resoluciones internacionales suelen tratar de manera conjunta la cadena perpetua y las penas privativas de libertad de larga duración<sup>80</sup>.

Por otro lado, otra diferencia radica en el hecho de que los códigos penales de estos estados recogen requisitos objetivos y previsibles para conceder la suspensión de la pena. En cambio, en España, para que la pena se revise y no sea permanente, se necesita la difícil concurrencia de una serie de requisitos rigurosos e imprevisibles que más que conservar la esperanza del interno de recuperar la libertad y recapacitar sobre un futuro próximo lejos del encarcelamiento, parece que le obligan a sacrificar su dignidad humana y transformar su personalidad<sup>81</sup>.

En conclusión, España ha renunciado a establecer en nuestro derecho punitivo un modelo de ejecución de las penas “progresivo” caracterizado por la temporalidad e individualización de las penas que había nacido en nuestro país a principios del siglo XIX, por incorporar otros sistemas ajenos (los ordenamientos jurídicos europeos citados), sin dar importancia a los resultados exitosos o adversos de los mismos. Así cabe afirmar que el legislador español con la única finalidad de asemejar nuestra legislación penal a la del resto de países, solamente ha tenido en consideración las constantes exigencias punitivas de la opinión pública y se ha olvidado de las demandas resocializadoras de los condenados<sup>82</sup>.

## **2.6. La jurisprudencia del TEDH y TC.**

Otro de los argumentos defendidos en el Parlamento español para justificar la aprobación de esta medida legislativa en el Código Penal de 2015 es el siguiente: el TEDH decreta que la pena de prisión permanente revisable se ajusta a la CEDH en sentencias como el caso *Meixner vs. Alemania* del 3 de noviembre de 2009 o el caso de *Bodein vs. Francia* del 13 de noviembre de 2014.

---

<sup>80</sup> CUERDA RIEZU, A.; *La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión...*, Op. Cit., pág. 23.

<sup>81</sup> GOROSTIZA, J. M. L.; “Prisión perpetua y de muy larga duración tras la LO 1/2015 ¿Derecho a la esperanza?: Con especial consideración del terrorismo y del TEDH”, *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, 17, 20, 2015, pág. 3

<sup>82</sup> ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable...*, Op. Cit., pág. 129.

Sin embargo, este argumento se debe matizar porque hay que tener en cuenta que para el TEDH no existe una única modalidad de cadena perpetua. Esto lo podemos deducir de la sentencia del caso *Vinter y otros vs. Reino Unido* comentada con anterioridad, en la cual, el tribunal enumera tres tipos de pena:

- (i) *una pena a cadena perpetua en la que el recluso puede solicitar la libertad condicional después de haber cumplido un periodo mínimo de su condena;*
- (ii) *una pena a cadena perpetua discrecional sin la posibilidad de solicitar la libertad condicional (esto es, una pena prevista por la ley, pero que requiere una decisión discrecional del juez para su imposición); y*
- (iii) *una pena a cadena perpetua obligatoria sin la posibilidad de solicitar la libertad condicional (esto es, una pena prevista por la ley y que no deja margen de apreciación al juez para decidir su imposición)*<sup>83</sup>.

El legislador español lleva a cabo una lectura forzada y extrapolada de los sucesivos pronunciamientos del TEDH y no tiene en cuenta que este tribunal, cada vez que se ha manifestado acerca de esta pena, ha realizado una interpretación histórica de las leyes penales de países que originariamente han regulado esta figura como Italia, Alemania y Francia, para acomodar tales regulaciones al Convenio.

El motivo por el cual el TEDH admite que ciertos tipos de cadena perpetua sean acordes al artículo 3 del CEDH es por la existencia del carácter revisable y no vitalicio de la pena que permite al interno volver a conseguir la libertad y reinserirse en la sociedad. Esto significa que dicha revisión tiene que ser real y efectiva, esto es, en todo caso se debe dar la posibilidad de reducir la pena, de suspenderla o de liberar directamente al penado. Así, en el Caso *Iorgov contra Bulgaria* se establece que: “*la aplicación del artículo 3 exige que los malos tratos excedan de cierto umbral de gravedad, cuya apreciación es relativa por definición y depende del conjunto de datos de la causa, concretamente de la duración del trato y de sus efectos físicos y mentales, así como, en ocasiones, del sexo, la edad y el estado de salud de la víctima.*” Por esta razón será contrario a este CEDH “*una pena perpetua irreductible, que priva al interesado de toda esperanza de ser puesto en libertad*”. No obstante, sobre esta cuestión hay que agregar que la dignidad humana se basa en dos componentes: uno,

---

<sup>83</sup> STEDH de 9 de julio de 2013, *Vinter y otros vs. Reino Unido*.

evitar la cosificación de la persona para lograr otras aspiraciones y dos, la prohibición de imponer penas o medidas inhumanas y degradantes. Lo cierto es que el TEDH, a mi modo de ver, únicamente se ocupa de lo primero y no es consciente del detrimento a la dignidad humana y del sufrimiento intolerable que puede generar para un interno la pena privativa de libertad durante un extenso periodo de tiempo<sup>84</sup>.

Sobre la necesidad de revisar la pena, también nuestro TC asume la misma línea jurisprudencial del TEDH en diversas resoluciones como por ejemplo la STC 181/2004, de 2 de noviembre, pero tampoco aborda el problema de la larga duración de las penas ni analiza la viabilidad para obtener la puesta en libertad del interno.

Sobre este propósito, en los fallos posteriores, el TEDH profundiza en la idea de que los estados deben establecer instrumentos legales que logren la rehabilitación del penado cuando las condenas de prisión sean indeterminadas en el tiempo. El Tribunal en la sentencia de 18 de septiembre de 2012, por primera vez suaviza las condiciones prácticas de cumplimiento de las condenas y concretamente en ese caso, señaló que los internos no disponían de medios formativos, cursos o talleres educativos destinados a subsanar las carencias pedagógicas y a conseguir la reeducación y reinserción<sup>85</sup>.

La última resolución del TEDH sobre esta materia es el caso *Hutchinson vs. United Kingdom* de 3 de febrero de 2015<sup>86</sup>. En esta sentencia el tribunal dispone lo siguiente: para que una condena sea compatible con el artículo 3 del CEDH se debe revisar de manera obligatoria, con el objetivo de poder conceder la suspensión de la pena cuando se perciban cambios positivos en la conducta del condenado. Esto supone la obligación de que las legislaciones internas de los Estados incorporen mecanismos de revisión y garantías que den acceso a la libertad condicional<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> STEDH de 2 de septiembre de 2010, *Iorgov contra Bulgaria*. Citado por DAUNIS RODRÍGUEZ, A. “La prisión permanente revisable: principales argumentos en contra de su incorporación al acervo punitivo español”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª Época, N° 10, 2013, pág. 284.

<sup>85</sup> DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; “La prisión permanente..., Op. Cit., pág. 88

<sup>86</sup> STEDH de 3 de febrero de 2015, *Hutchinson vs. United Kingdom*.

<sup>87</sup> GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., & GÓRRIZ ROYO, E.; *Comentarios a la reforma...*, Op. Cit., pág. 218-220.

### **3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS: INVOCACIÓN DEL ARTÍCULO 25.2 CE PARA IMPUGNAR LA DENEGACIÓN DE DETERMINADAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN.**

Dentro del Capítulo III del Título III del Libro I del Código Penal español se encuentran reguladas las *“formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional”*

Para comenzar, podemos definir en pocas palabras que las “alternativas a la prisión” o los “sustitutivos penales” constituyen un conglomerado heterogéneo de diversas medidas. La característica desigual de este grupo de instituciones se debe principalmente a que cada una de ellas presenta una naturaleza jurídica propia y una forma de operar en la práctica distinta. No obstante, la mayoría de la doctrina admite que entre las mismas podemos encontrar dos similitudes: en primer lugar, este grupo de sustitutivos se destinan habitualmente a las penas de corta duración y, en segundo lugar, todas ellas se destinan a impedir la imposición de la pena privativa de libertad o también, a reducir su plazo de duración<sup>88</sup>.

Sobre este tema quiero subrayar la relación que existe entre las penas alternativas a la prisión y los principios constitucionales de nuestro sistema penal, en especial con el principio resocializador que figura en el artículo 25.2 CE. ¿Se puede afirmar que las alternativas a la pena de prisión tienen un soporte constitucional en este principio?

Como ya indiqué en el Capítulo primero, debido a la multitud de opiniones doctrinales y jurisprudenciales, la respuesta a la pregunta anterior variará según el significado que se conceda al término “resocialización”. A pesar de la decadencia del ideal resocializador y de las sucesivas críticas que brotaron a partir de los años setenta, hoy en día se intenta rescatar la naturaleza humanitaria de la pena. La mayor parte de los autores como MUÑOZ CONDE, dan a este modelo un significado negativo entendiendo que en la medida de lo posible, la ejecución de la pena debe evadir los efectos desocializadores de la prisión, sin coacciones. Ilustrativamente decía el Profesor

---

<sup>88</sup> SERRANO PASCUAL M.; *Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal español*, 1ª Ed, Trivium, Madrid, 1999, pág. 27 y ss.

BARBERO SANTOS que el objetivo es conseguir que “*el sujeto lleve en el futuro una vida sin cometer delitos, no que haga suyos unos valores que pretende repudiar*”<sup>89</sup>.

Es necesario recalcar que, indiscutiblemente, la CE formula dentro de su articulado la reinserción y la reeducación como uno de los fines primordiales de la pena, sin nombrar otros posibles como podrían ser la compensación o la humanización. Ello se traduce en la imposición de dos obligaciones al legislador positivo: por un lado, la imposibilidad de introducir castigos inhumanos o degradantes que destruyan la dignidad del preso y por otro lado, la obligación de instaurar una serie de actividades o instrumentos dirigidos a acortar la duración de la reclusión y a paliar los efectos dañinos del encarcelamiento, a sustituir esta privación de libertad por otras penas alternativas y asimismo a posibilitar el contacto del sujeto con el mundo exterior para mantener sus vínculos sociales, laborales, familiares<sup>90</sup>. Del mismo modo, no hay que olvidar que este mandato constitucional afecta al resto de fases que se despliegan hasta el cumplimiento de la pena. En el momento de determinación de la pena, el juez en todo caso tiene que respetar el principio de legalidad del artículo 25.1 CE, es decir, tiene que ceñirse a la conducta punible delimitada en la ley y asignar una condena que evite una exclusión infundada. Por último, en la fase de la ejecución del castigo, el mencionado deber constitucional va dirigido a todas las instituciones encargadas de impedir la exclusión absoluta del interno y de asimilar su vida privada de libertad con la que tendría lejos de los muros de la cárcel. Para su observancia, dichas instituciones deberán tener en cuenta, además del tratamiento penitenciario como elemento resocializador, otra serie de instrumentos como la libertad condicional, el tercer grado, los permisos, etc<sup>91</sup>.

Sintetizando, con esto quiero decir que a pesar de que nuestro sistema de penas se incluye en un contexto de crisis del ideal resocializador, en el que predomina la obcecación por exigir el cumplimiento completo de las condenas y la disminución de

---

<sup>89</sup> MUÑOZ CONDE; “La resocialización del delincuente, análisis y crítica de un mito”. *Revista de Ciencia Penal y Criminología*, N° 7, 1979, pág. 147. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. *Lecciones Y Materiales Para El Estudio Del Derecho Penal*, Tomo I, Introducción Al Derecho Penal, Iustel, Madrid, 2009, pág. 255.

<sup>90</sup> SERRANO PASCUAL M.; *Las Formas Sustitutivas De La Prisión...*, Op. Cit., pág. 91.

<sup>91</sup> SILVA SÁNCHEZ, J.M.; *Aproximación al Derecho Penal contemporáneo*, Bosch, Barcelona, 1992, pág. 38-40.



los beneficios penitenciarios, el artículo 25.2 CE contiene una guía dirigida al legislador para que desarrolle alternativas a las penas privativas de libertad<sup>92</sup>.

Seguidamente, examinaremos de manera breve cómo en diferentes pleitos penales, el artículo 25.2 de la CE se ha utilizado para impugnar la denegación de estas instituciones aludidas.

En primer lugar, hay que hacer referencia a la suspensión de la ejecución de la pena. Sus rasgos principales los encontramos en el artículo 80 y siguientes del CP: se basa en una decisión del juez discrecional (siempre que la pena de prisión no supere los dos años, o tres en el caso de drogodependencia) y motivada, puesto que tendrá que considerar las circunstancias particulares y la peligrosidad del individuo. A lo largo del plazo temporal de la suspensión, el condenado está sujeto a ciertas limitaciones y deberes, por ejemplo, la prohibición de visitar ciertos lugares o acercarse a la víctima del delito, la obligación de comparecer ante el juez o participar en programas culturales, educativos.

En la práctica ha habido casos en los que se han denegado injustificadamente solicitudes para suspender de la ejecución de la pena privativa de libertad. En la STC 57/2007 de 12 de marzo, el TC entendió que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo. El motivo señalado fue la falta de motivación de las resoluciones judiciales que impide saber la *ratio decidendi* de la denegación. El Alto Tribunal, remitiéndose a sentencias anteriores (STC 25/2000, de 31 de enero, STC 8/2001, de 15 de febrero) sostuvo que las decisiones judiciales sobre la concesión o denegación de la suspensión, afectan a un valor concreto: la libertad y por ello es importante que estas resoluciones “*no sólo constituyan la aplicación no arbitraria de las normas adecuadas al caso sino también que exterioricen “los elementos necesarios para entender efectuada la ponderación de los fines de la institución y los bienes y valores en conflicto”*”. De esta manera, la suspensión “*constituye una de las instituciones que tienden a hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social contenido en el art. 25.2 CE, la resolución judicial debe ponderar ‘las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad*

---

<sup>92</sup> BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.; *Lecciones y materiales para el estudio...*, Op. Cit., pág. 256.

*principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad*<sup>93</sup>.

En segundo lugar, otra figura contemplada en nuestra legislación para acatar los fines resocializadores de nuestra Constitución son los permisos ordinarios de salida. Esta medida permite que el condenado, mientras cumple la pena de prisión, pueda quedar en libertad transitoriamente siempre que concurren unos presupuestos: que haya satisfecho un cuarto de la misma, que esté clasificado en el segundo o tercer grado y por último, que tenga un comportamiento adecuado<sup>94</sup>.

El artículo 25.2 CE también se ha utilizado para impugnar la denegación de los permisos de salida en numerosas resoluciones judiciales. El TC en la STC 112/1996 de 24 de junio anuló los autos de los juzgados de instancias anteriores que habían denegado, sin fundamentos suficientes, el permiso ordinario de salida del recurrente que reunía todos los requisitos exigidos en la ley. En el cuarto fundamento jurídico el TC subraya que aunque *este principio constitucional* (el del artículo 25.2 CE) *no constituya un derecho fundamental no significa que pueda desconocerse en la aplicación de las leyes, y menos aun cuando el legislador ha establecido, cumpliendo el mandato de la CE, diversos mecanismos e instituciones en la legislación penitenciaria precisamente dirigidos y dirigidas a garantizar dicha orientación resocializadora, o al menos, no desocializadora precisamente facilitando la preparación de la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena*<sup>95</sup>.

Así mismo, sobre ello vuelve a incidir en la sentencia 23/2006, de 20 de enero en el FJ 2: *la posibilidad de conceder permisos de salida penitenciarios se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE), al contribuir a lo que hemos denominado la "corrección y readaptación del penado"*<sup>96</sup>.

---

<sup>93</sup> STC 57/2007, de 12 de marzo.

<sup>94</sup> MOLINÉ, J. C.; El sistema penitenciario en España. *Jueces para la Democracia*, 45, 15-27, 2002, pág. 21.

<sup>95</sup> STC 112/1996 de 24 de junio.

<sup>96</sup> STC 23/2006, de 20 de enero.

En tercer lugar, dentro de los llamados “beneficios penitenciarios” tiene cabida otra institución penitenciaria: la libertad condicional. También ha recibido la denominación de “cuarto grado”<sup>97</sup>, ya que es el último paso del *sistema penitenciario progresivo*. Esto quiere decir que es una medida que proporciona mayores cuotas de libertad y más incentivos a conseguir transformaciones positivas en la conducta del interno para que no vuelva a delinquir en un futuro en base a la orientación del artículo 25.2 CE. No obstante, esta institución no se reconoce de manera automática por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sino que está condicionada a la observancia de los requisitos generales del artículo 90 CP: a) *Que se encuentre clasificado en tercer grado*, b) *Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta*, c) *Que haya observado buena conducta*<sup>98</sup>.

Por lo demás, en este punto hay que indicar que la regulación de la libertad condicional ha sido modificada por la reforma del CP de 2015. Entre otros cambios, la naturaleza jurídica de esta figura se ha endurecido notablemente ya que de ser una forma determinada de cumplir la pena ha pasado a ser una modalidad de suspensión de la misma. Ello se traduce en que consecuentemente, al considerarse suspendida la pena, el periodo que el sujeto pase en situación de libertad condicional no se computará como tiempo ejecutado de la pena<sup>99</sup>.

Finalmente, cabe enfatizar al igual que en las otras instituciones, los casos prácticos en los que se ha rebatido la denegación de la libertad condicional. Para ilustrarlo mejor, en la STC 79/1998 de 1 de abril el Alto Tribunal incide en que las resoluciones judiciales deben estar motivadas cuando esté implicado algún beneficio penitenciario. Esto se debe a que, como se expone en el fundamento jurídico cuarto, *la denegación del beneficio penitenciario de libertad condicional puede suponer una lesión del derecho fundamental a la libertad consagrado en el art. 17.1 CE. Ello es así porque, como ha afirmado este Tribunal en relación con otros beneficios penitenciarios, la previa imposición de una pena de prisión conlleva la imposibilidad de fundar una pretensión*

---

<sup>97</sup> El primer grado de tratamiento es el sistema cerrado, el segundo el régimen ordinario, el tercero la prisión abierta y el cuarto la libertad condicional. VILCHES, B. T.; “El modelo de libertad condicional español”, *Revista de derecho y proceso penal*, 15, 21-271, 2006, pág. 130 y ss.

<sup>98</sup> BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.; *Lecciones Y Materiales...*, Op. Cit., pág. 271 y ss.

<sup>99</sup> SALAT PAISAL, M.; “Análisis del instituto de la libertad condicional en la reforma del CP de 2015”, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 19, 415-436, 2015, pág. 416 y 417.

*de amparo frente a la denegación de un beneficio penitenciario invocando el derecho a la libertad, pues es la Sentencia firme condenatoria la que constituye título legítimo de privación de ese derecho fundamental*<sup>100</sup>.

En todas las sentencias explicadas en este capítulo, el TC utiliza unos argumentos muy similares que en síntesis vienen a decir que, cuando ante los órganos jurisdiccionales se invoque alguna de estas instituciones penitenciarias u otras encaminadas a alcanzar la reeducación y reinserción, el fallo jurisdiccional estimatorio o denegatorio debe estar complementado por una motivación precisa, completa y proporcionada porque de lo contrario la decisión sería arbitraria e irracional<sup>101</sup>.

#### **4. CONCLUSIONES FINALES.**

**PRIMERA.** El entendimiento del término “resocialización” genera muchos problemas, desde los referentes a su ámbito de aplicación hasta sus fines últimos, debido fundamentalmente a la falta de un acuerdo doctrinal unánime. Los argumentos teóricos abordados a lo largo del trabajo demuestran que existe una crisis generalizada sobre el ideal resocializador (lo cual, no significa que se haya rechazado definitivamente) y gran parte de autores consideran que el objetivo resocializador es un “mito”, una utopía. En general, tanto en España como en otros países está muy consolidada la idea de que la orientación resocializadora es ineficaz dentro del sistema penitenciario.

**SEGUNDA.** Frente a estas críticas contra la meta resocializadora, considero que es importante mantener este principio en nuestro sistema, ya que su abandono absoluto supondría graves consecuencias: el retorno a nociones puramente represivas o retributivas de la pena y en consecuencia, la transformación de las celdas en simples depósitos de personas. Por ello, es fundamental conservar este ideal como principio informador del sistema penitenciario en su conjunto, facilitando el contacto del preso con su entorno familiar, social y evitando en la medida de lo posible los efectos nocivos de la prisión.

---

<sup>100</sup> STC 79/1998, de 1 de abril.

<sup>101</sup> STC 112/1996, de 29 de julio.

**TERCERA.** En la decadencia de este principio resocializador también ha influido la débil y contradictoria lectura que realiza la jurisprudencia del TC del art 25.2 CE, lo cual, genera a la vez su indeterminación en la práctica. Los pronunciamientos más relevantes son los siguientes:

En primer lugar, el TC ha afirmado que este precepto no contiene una finalidad exclusiva de las penas privativas de libertad, sino que hay que tener en cuenta otros propósitos: los fines preventivos generales, ya que todos ellos buscan un objetivo común: la protección de bienes jurídicos penales.

En segundo lugar, la doctrina del TC mantiene una posición restrictiva acerca de la naturaleza jurídica de este principio, al entender que *“no contiene un derecho subjetivo, ni menos aún un derecho fundamental, susceptible de protección en vía de amparo, sino tan sólo un mandato del constituyente al legislador y a la Administración penitenciaria para orientar la ejecución de las penas privativas de libertad”*. Este pronunciamiento trata de evitar que se pueda utilizar el art. 25.2 CE como vía de escape para no imponer una condena a quien ya esté reinsertado en la sociedad o no lo necesite. No obstante, encontramos en sentencias posteriores doctrina contradictoria en la que el Alto Tribunal niega que la resocialización sea una finalidad de la pena, sustituyéndolo por otra: la retención y custodia.

**CUARTA.** La reforma del Código Penal en el año 2015 comporta modificaciones importantes en nuestro ordenamiento jurídico. Una de las novedades que introdujo fue la prisión permanente revisable, cuya aprobación se debe a las constantes demandas de la opinión pública, basadas en ampliar la protección y la seguridad de la sociedad a través del aumento de la severidad de las penas.

**QUINTA.** La prisión permanente revisable es contraria a nuestra Constitución Española debido a su naturaleza indefinida, indeterminada, desproporcionada, severa, inhumana y totalmente contraria al parámetro resocializador del art 25.2 CE. Además, en mi opinión, es una pena injustificada e innecesaria dentro de nuestro Derecho ya que con ella no se ha conseguido el objetivo por el que se aprobó: disminuir o acabar con la delincuencia. Para lograr una prevención eficaz de los delitos es inútil centrarse exclusivamente en las consecuencias de los mismos, ya que hay que tener en cuenta también el origen y las causas.

**SÉPTIMA.** La aprobación de esta figura se traduce en dos consecuencias principalmente. La primera es el abandono de las ideas resocializadoras y de la humanización del cumplimiento de las penas. La segunda es la consolidación de un sistema penitenciario represivo cuyos únicos objetivos son la custodia, el castigo, la venganza, el control y la intimidación.

**OCTAVA.** El artículo 25.2 CE es una norma jurídica que también vincula al poder judicial. Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la denegación de la concesión de determinadas instituciones penitenciarias tienen el objetivo de salvaguardar el derecho legítimo de los presos a adquirirlas. Las denominadas “alternativas a la prisión”, según el Alto Tribunal, *“tienden a hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social contenido en el art. 25.2 CE”*. Por ello, la doctrina constitucional reitera sobre la importancia de que los fallos judiciales que afecten a estas instituciones deben tener una motivación suficiente, precisa y proporcionada.

## **BIBLIOGRAFÍA**

ACALE SÁNCHEZ, M.; *La prisión permanente revisable: ¿pena o cadalso?*, Iustel, Madrid, 2016.

ÁLVAREZ GARCÍA, F. J.; *Consideraciones sobre los fines de la pena en el ordenamiento constitucional español*, Comares, Granada, 2001

ARÁN, M. G.; “La ejecución penitenciaria en una sociedad cambiante: hacia un nuevo modelo”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, (30), 5-14, 2006

AYUSO VIVANCOS, A.; *Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España*, Serie Educación Social, 15, Nau Llibres, Valencia, 2003

BARATTA, A.; “Requisitos mínimos del respeto de los derechos humanos en la ley penal”, *Nuevo Foro Penal*, 12 (34), 421-435, 1986.

BARNES, J. El principio de proporcionalidad. *Cuadernos de derecho público*, 5, 15-49, 1998

CERVELLÓ DONDERIS, V.; *Prisión perpetua y de larga duración: Régimen jurídico de la prisión permanente revisable*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015

BECCARIA, C., & BIBLIOTECA NACIONAL; *Tratado de los delitos y de las penas*. Centro de Publicaciones, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., PÉREZ CEPEDA, A. I., Y ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L.; *Introducción al derecho penal*, 2ª Ed, Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal, Iustel, Madrid, 2015

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.; *Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo VI, Derecho penitenciario*, 2ª Ed, Iustel, Madrid, 2016

BERGALLI, R.; Ideología de la resocialización. La Resocialización como ideología. La situación en España. *Paper d'Estudis y Formació*, 1987

BERMEJO, D. F.; “Una propuesta revisable: la prisión permanente”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, (110), 5, 2014

BLANCO LOZANO, C., & TINOCO PASTRANA, A.; *Prisión y resocialización*, Difusión Jurídica, Madrid, 2009

CID MOLINÉ, J.; *¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal española*, Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, Madrid, 1994

CID MOLINE, J.; “Derecho a la reinserción social. Consideraciones a propósito de la reciente jurisprudencia constitucional en materia de permisos”, *Jueces para la democracia. Información y debate*, Madrid, 1998

CID MOLINÉ, J.; “La suspensión de la pena en España: descarceración y reincidencia”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, Nº 15, 2005

CUERDA RIEZU, A.; *La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: Por qué son inconstitucionales en España*, Justicia penal, 23, Atelier, Barcelona, 2011

CUESTA ARZAMENDI, J. L.; “El principio de humanidad en Derecho Penal”, *Instituto Vasco de Criminología*, 2013

CUSSAC, J. L. G., EVANGELIO, A. M., ROYO, E. G., SOUTO, M. A., RIMO, A. A., JIMÉNEZ, E. Y MATEU, J. C. C.; *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, 2015

CLEMMER, *The prison community*, 2ª Ed., Rinehart & Winston, Nueva York, 1958

DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; *Ejecución de penas en España: Una reinserción social en retirada*, Comares, Granada, 2016

DAUNIS RODRÍGUEZ, A.; “La prisión permanente revisable: principales argumentos en contra de su incorporación al acervo punitivo español”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª Época, Nº 10, 2013

DE MOLINA, ANTONIO GARCÍA-PABLOS; “La supuesta función resocializadora del Derecho Penal: utopía, mito y eufemismo.” *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 645-700, 1979

DELGADO DEL RINCÓN, L.E; “El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la reeducación y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad”, *Revista Jurídica de Castilla y León*, (1), 339-370, 2004

GARCÍA VALDÉS, C., & MESTRE DELGADO, E.; *Legislación penitenciaria*, 16ª Ed., Derecho - Biblioteca de textos legales, Tecnos, Madrid, 2014

FERNÁNDEZ GARCÍA, J., BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., & ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L.; *Manual de derecho penitenciario*, Universidad de Salamanca, 2001



FERNÁNDEZ GARCÍA, J.; *Manual de derecho penitenciario*, CISE, Salamanca, 2006

GALVÁN GONZÁLEZ, F.; *Recuerdos penales de ayer, hoy y mañana*, Ubijús, México D.F, 2015

GARCÍA VALDÉS, C., & SPAIN.; *Comentarios a la Ley general penitenciaria*, Civitas, Madrid, 1980

GARLAND, D., & SOZZO, M.; *La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, Gedisa, Barcelona, 2005

GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., & GÓRRIZ ROYO, E.; *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, 2ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015

GOROSTIZA, J. M. L.; Prisión perpetua y de muy larga duración tras la LO 1/2015: ¿derecho a la esperanza?: con especial consideración del terrorismo y del TEDH, *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, (17), 20, 2015

GRACIA MARTÍN, L.; *Fundamentos de dogmática penal: Una introducción a la concepción finalista de la responsabilidad penal*, Atelier, Barcelona, 2006

GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL; *Alternativas al sistema de sanciones penales: nuevas penas y medidas restrictivas de derechos*, Grupo de Estudios de Política Criminal, Málaga, 2012

HUERTAS DÍAZ, O., SILVERA SARMIENTO, A., & TRUJILLO GONZÁLEZ, J. S.; Perspectivas de los Derechos Humanos y la libertad en contextos de sistemas penitenciarios. *Análisis Político*, (28), 84, 15-134, 2015

IZQUIERDO, E. M. D.; “El nuevo sistema de penas a la luz de las últimas reformas”, *Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*, Dykinson, 2015

JAÉN VALLEJO, M., Y PERRINO PÉREZ, A. L.; *La Reforma penal de 2015: Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo*, Dykinson, Madrid, 2015

JIMÉNEZ GÓMEZ, F.; *Evaluación de la peligrosidad en la población penitenciaria: valoración del riesgo de violencia y su reincidencia*, Colección Estudios ciencias de la seguridad, Ratio Legis, Salamanca, 2014

JUANATEY DORADO, C.; “Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable”, *Estudios de Política Criminal, Derecho Penal y Criminología*, Vol. LXV, 2012

LAMARCA PÉREZ, C.; “Principio de legalidad penal”, *Revista en Cultura de la Legalidad*, EUNOMÍA, 156-160, 2014

LARA, P. A. R.; “Pena de prisión permanente revisable: análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus problemas de constitucionalidad”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, (3), 131-172, 2016

LUQUÍN RIVERA, E.; *Hacia un sistema penal legítimo*, 1ª Ed, Doctrina jurídica contemporánea, 47, Distribuciones Fontamara, México, D.F, 2009

MANZANARES SAMANIEGO, J. L.; *La reforma del Código Penal de 2015: Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo*, 1ª Ed, La Ley, Madrid, 2015

MAPELLI CAFFARENA, B.; “Los fines de la ejecución de la pena privativa de libertad”, AA. VV., *I Jornadas Penitenciarias Andaluzas, Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía*, Sevilla, 1983

MAPELLI CAFFARENA, B.; *Principios fundamentales del sistema penitenciario español*, Bosch, Barcelona, 1983

MARTÍNEZ, C. S.; Aspectos procesales de la prisión permanente revisable. Una aproximación al tercer grado, permisos de salida, revisión y remisión definitiva, In *Anales de Derecho*, 2016

MARTÍNEZ MORA. G.; *Alternativas jurídicas al tratamiento de la delincuencia habitual*, L'Hospitalet de Llobregat, Bosch, 2015

MATELLÁN, L. P.; *La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal deshumanizado*, Clivatge, Nº 3, 2015

MELIÁ, M. C.; “La pena de cadena perpetua («prisión permanente revisable») en el Proyecto de reforma del Código Penal”, *Diario La Ley*, (8175), 1, 2013

MIR PUIG, C.; *Derecho penitenciario: El cumplimiento de la pena privativa de libertad*, 3ª Ed., Atelier, Barcelona, 2015

MOLINÉ, J. C.; El sistema penitenciario en España. *Jueces para la Democracia*, (45), 15-27, 2002

NIETO MARTÍN, A., MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., Y BECERRA MUÑOZ, J.; *Hacia una evaluación racional de las leyes penales*, Marcial Pons, Madrid, 2016

PEITEADO MARISCAL, P.; *La ejecución jurisdiccional de condenas privativas de libertad*, EDESA, Madrid, 2000

PÉREZ CEPEDA, A. I., Y BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.; *Derecho penitenciario*, 2ª Ed., Iustel, Madrid, 2016

QUINTERO OLIVARES, G., Y MORALES PRATS, F.; *Comentarios al código penal español*, 6ª Ed., Colección Grandes tratados Aranzadi, 45, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi ThomReuters, 2011

RÍOS MARTÍN, J. C., SEGOVIA BERNABÉ, J. L., Y PASCUAL RODRÍGUEZ, E.; *Las penas y su aplicación: Contenido legal, doctrinal y jurisprudencial*, 4ª Ed., Colex, Majadahonda, 2009

RÍOS MARTÍN, J.C.; La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, *Editorial Tercera Prensa SL*, 2013

SALAT PAISAL, M.; Análisis del instituto de la libertad condicional en la reforma del CP de 2015, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, (19), 415-436, 2015

SANCHÍS, L. P.; “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, *Revista del centro de estudios constitucionales*, 22, 9-57, 1995

SERRANO PASCUAL M.; *Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal español*, Trivium, Madrid, 1999

TAMARIT SUMALLA, J. M.; *Curso de derecho penitenciario*, 2ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005

TAPIA, M. I. R., & WOISCHNIK, J.; “Principios constitucionales en la determinación legal de los marcos penales. Especial consideración del principio de proporcionalidad”, *Anuario de derecho constitucional latinoamericano*, 143, 2001

VILCHES, B. T.; “El modelo de libertad condicional español”, *Revista de derecho y proceso penal*, (15), 21-271, 2006

VON LISZT, F., & Y RIVACOBIA, M. D. R.; *La idea de fin en el derecho penal*, Valparaíso, Edeval, 1984

ZAFFARONI, E. R., ALAGIA, A., & SLOKAR, A.; *Derecho penal. Parte general*, 2ª Ed., Ediar, Buenos Aires, 2005

ZAPATERO, L. A. A.; “Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal”, *Revista española de derecho constitucional*, 3(8), 9-46, 1983

ZAPICO BARBEITO. M.; ¿Un derecho fundamental a la reinserción social? Reflexiones acerca del artículo 25.2 de la CE. *Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña*, 919-944, 2009

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L, Y TORO, M. C.; *La pena de prisión en busca de sentido. El fin de la pena privativa de libertad en los albores del siglo XXI*, Universidad de Salamanca, Gredos, 2014

ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L Y, & CAVALCANTI, S. C. M.; *Libertad condicional y reinserción social: un análisis comparado entre Brasil y España*, Universidad de Salamanca, Gredos, 2013